



Consejo de Seguridad

Septuagésimo noveno año

9614^a sesión

Martes 23 de abril de 2024, a las 10.00 horas

Nueva York

Provisional

Presidencia: Sr. Fearne (Malta)

Miembros:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Argelia | Sra. Samai |
| China | Sr. Fu Cong |
| Ecuador | Sr. De La Gasca |
| Eslovenia | Sr. Žbogar |
| Estados Unidos de América | Sra. Thomas-Greenfield/Sr. Kelley |
| Federación de Rusia | Sr. Nebenzia/Sra. Zabolotskaya |
| Francia | Sra. Broadhurst Estival |
| Guyana | Sra. Persaud |
| Japón. | Sr. Yamazaki |
| Mozambique | Sr. Afonso |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Dame Barbara Woodward |
| República de Corea. | Sr. Sangjin Kim |
| Sierra Leona | Sra. Karim |
| Suiza. | Sra. Baeriswyl |

Orden del día

Las mujeres y la paz y la seguridad

Prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos mediante la desmilitarización y el control de armamentos que responda a las cuestiones de género

Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos (S/2024/292)

Carta de fecha 16 de abril de 2024 dirigida al Secretario General por la Representante Permanente de Malta ante las Naciones Unidas (S/2024/311)

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y la traducción de los demás discursos. El texto definitivo será reproducido en los *Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad*. Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y deben enviarse con la firma de un miembro de la delegación interesada, incorporadas en un ejemplar del acta, a la Jefatura del Servicio de Actas Literales, oficina AB-0928 (verbatimrecords@un.org). Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org>).

24-11108 (S)



Documento accesible

Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Aprobación del orden del día

Queda aprobado el orden del día.

Las mujeres y la paz y la seguridad

Prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos mediante la desmilitarización y el control de armamentos que responda a las cuestiones de género

Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos (S/2024/292)

Carta de fecha 16 de abril de 2024 dirigida al Secretario General por la Representante Permanente de Malta ante las Naciones Unidas (S/2024/311)

El Presidente (*habla en inglés*): Deseo dar una calurosa bienvenida a los Ministros y a otros representantes de alto nivel que están presentes en el Salón del Consejo de Seguridad. Su presencia hoy aquí pone de relieve la importancia del tema que abordaremos.

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a participar en esta sesión a los representantes de Albania, Andorra, la Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, el Brasil, Bulgaria, el Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Chequia, la República Democrática del Congo, Dinamarca, la República Dominicana, Egipto, El Salvador, Estonia, Etiopía, Alemania, Guatemala, Hungría, la India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, México, Montenegro, Marruecos, Myanmar, el Reino de los Países Bajos, Nepal, Panamá, Polonia, Portugal, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Tailandia, Ucrania, los Emiratos Árabes Unidos y el Yemen.

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a participar en esta sesión a las siguientes exponentes: la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Sra. Pramila Patten; la fundadora y Presidenta de Darfur Women Action Group, Sra. Niemat Ahmadi, y la Sra. Danai Gurira, Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Mujeres, dramaturga y actriz galardonada.

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito también a participar en esta

sesión al Jefe de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas, Sr. Stavros Lambrinidis, y a la Observadora Permanente y Jefa de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja ante las Naciones Unidas, Sra. Laetitia Courtois.

Propongo también que el Consejo invite al Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Su Excelencia el Arzobispo Gabriele Caccia, a participar en la sesión, de conformidad con el Reglamento Provisional y la práctica establecida al respecto.

El Consejo de Seguridad comenzará ahora el examen del tema que figura en el orden del día.

Deseo señalar a la atención de los miembros del Consejo el documento S/2024/292, que contiene el informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, y el documento S/2024/311, que contiene el texto de una carta de fecha 16 de abril de 2024 dirigida al Secretario General por la Representante Permanente de Malta ante las Naciones Unidas, en la que se transmite una nota conceptual sobre el tema objeto de examen.

Tiene la palabra la Sra. Patten.

Sra. Patten (*habla en inglés*): Quiero expresar mi sincera gratitud al Gobierno de Malta por su iniciativa estratégica de convocar este debate abierto.

Doy una cordial bienvenida a la fundadora de Darfur Women Action Group, Sra. Niemat Ahmadi, a la que felicito por su firme activismo y su dedicación a la causa de la paz. Al cumplirse el triste primer aniversario de la reaparición de las hostilidades en el Sudán, la infatigable labor de la Sra. Ahmadi ayuda a que se preste atención a los terribles patrones de la violencia sexual relacionada con los conflictos, exacerbados por la proliferación de armas.

Doy también la bienvenida a la Sra. Danai Gurira, Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Mujeres, que ha dado voz con elocuencia a esta cuestión.

Nos encontramos reunidos hoy para examinar el 15º informe anual del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos (S/2024/292), en un momento en que se registra un retroceso en materia de igualdad de género, al tiempo que se financia la militarización en un grado sin precedentes; un momento en que los recursos mundiales se utilizan para avivar la llama de los conflictos, mientras mujeres y niños pasan hambre; un momento en que el gasto militar se dispara hasta superar los 2,2 billones de dólares, en tanto que

los presupuestos de la ayuda humanitaria sufren drásticos recortes; y un momento en que las armas siguen llegando a manos de los agresores, mientras que la inmensa mayoría de las víctimas no recibe ningún tipo de reparación o compensación. Nos encontramos reunidos también en un momento en que la búsqueda de la paz y de la igualdad de género vuelve a ser un acto radical. La tarea esencial, existencial, a la que nos enfrentamos es la de silenciar las armas y amplificar las voces de las mujeres, como colectivo fundamental para la paz.

Sin embargo, ahora mismo, en el Sudán y en Haití, mujeres y niñas sufren el terror y la brutalidad de la violencia sexual perpetrada a punta de pistola. En el Afganistán, la agresión sistemática contra las mujeres, su exclusión y la negación de sus derechos destruyen vidas y medios de subsistencia. Dos años después de que comenzara la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, miles de mujeres y niñas desplazadas y refugiadas se enfrentan a un mayor riesgo de ser víctimas de trata. En Oriente Medio, el actual derramamiento de sangre, los desplazamientos, los traumas y el terror afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Ellas están entre las numerosas víctimas de los ataques perpetrados por Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, y constituyen más de la mitad de las víctimas de los implacables bombardeos de Gaza, que han hecho añicos el sistema sanitario y han dejado a las supervivientes de violencia de género y a las embarazadas, entre muchas otras personas, en una situación desesperada, sin ningún lugar al que acudir.

El informe que hoy nos ocupa presenta un panorama general de los incidentes, los patrones y las tendencias de la violencia sexual relacionada con los conflictos en 21 situaciones preocupantes. Recoge 3.688 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos cometidos en el transcurso de 2023 y verificados por las Naciones Unidas, lo que refleja un impresionante aumento del 50 % en comparación con el año anterior. Esta subida del número de casos registrados es especialmente alarmante en un contexto mundial en el que el acceso humanitario sigue sujeto a graves restricciones y limitaciones.

En 2023, las mujeres y las niñas constituyeron el 95 % de los casos verificados, mientras que el 5 % de los casos registrados afectaron a hombres y a niños varones. En el 32 % de los casos, las víctimas fueron menores de edad, mientras que la gran mayoría de esos menores, el 98 %, fueron niñas. En 21 casos registrados, las víctimas fueron personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero,

queer e intersexuales, agredidas por su orientación sexual o su identidad de género reales o aparentes.

Si bien el informe deja constancia de la gravedad y la brutalidad de los incidentes verificados y documentados por las Naciones Unidas, no pretende en modo alguno reflejar el alcance o la prevalencia mundiales de un delito que, de manera crónica, se denuncia poco y que históricamente ha quedado oculto. Sabemos que, por cada superviviente que habla de su situación, hay muchas otras personas que callan por las presiones sociales, el estigma, la inseguridad, la falta de servicios y las escasas perspectivas de lograr justicia.

Casi la mitad de los casos verificados por las Naciones Unidas recogidos en el informe, el 43 %, se verificaron en contextos en los que se habían desplegado asesores de protección de las mujeres para poner en práctica las disposiciones en materia de observación, análisis y presentación de informes sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos establecidas por del Consejo en la resolución 1960 (2010). Por primera vez en este año, de conformidad con la resolución 2467 (2019), se han desplegado asesores de protección de las mujeres fuera del marco de una misión, concretamente a Ucrania. Además, en 2023 se efectuó el primer despliegue a escala regional de una asesora de protección de las mujeres, para ampliar la colaboración con la Unión Africana y observar las dinámicas regionales y las dimensiones transfronterizas de esta cuestión en todo el Cuerno de África.

El informe de este año incluye, por primera vez, una sección dedicada a Israel y el territorio palestino ocupado. Tras los atentados perpetrados el 7 de octubre por Hamás, otros grupos armados y civiles armados, visité Israel por invitación del Gobierno. Mi equipo y yo misma confirmamos que hay motivos razonables para creer que se produjeron actos de violencia sexual relacionada con el conflicto en al menos tres lugares, y que se cometieron y podrían seguir cometiéndose actos de violencia sexual contra personas retenidas como rehenes.

En cuanto a la Ribera Occidental ocupada, según la información verificada por las Naciones Unidas, las detenciones de mujeres y hombres palestinos practicadas por las fuerzas de seguridad israelíes tras los atentados del 7 de octubre han ido acompañadas con frecuencia de malos tratos, en particular formas de violencia sexual. Se han denunciado hechos similares en Gaza. Estas conclusiones no justifican ni legitiman en modo alguno la continuación de las hostilidades, y vuelvo a hacerme eco de los llamamientos del Secretario General en

favor de un alto el fuego humanitario que permita poner fin al indecible sufrimiento de los civiles palestinos y lograr la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.

En cuanto a las tendencias mundiales, el informe documenta el modo en que la violencia sexual coarta el acceso de las mujeres a los medios de subsistencia y el acceso de las niñas a la educación, en una situación de desplazamientos internos y transfronterizos que alcanzan un nivel récord. Las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual en los contextos de desplazamiento, como retornadas, refugiadas y migrantes.

Por ejemplo, en la parte oriental de la República Democrática del Congo, el clima de inseguridad física combinada con inseguridad alimentaria ha empujado a muchas mujeres y niñas desplazadas a la prostitución, por pura desesperación económica. En Etiopía, se han denunciado casos de explotación sexual a cambio de comida, así como de esclavitud sexual continuada en Tigré, en las proximidades de barracones y cuarteles de los portadores de armas. Además, en muchos contextos, las mujeres que dan a luz tras haber sufrido violaciones en tiempos de guerra suelen ser acusadas de asociación con el enemigo y se ven excluidas de las redes comunitarias y empujadas a la pobreza.

En cambio, la violencia sexual perpetrada impunemente sigue siendo rentable en la economía política de la guerra. La trata de personas con fines de explotación sexual derivada de los conflictos sigue generando beneficios para los grupos armados y extremistas violentos. En Haití, los grupos armados y las bandas criminales siguen recabando ingresos a través de los secuestros, utilizando la amenaza de la violencia sexual para obtener rescates cada vez más elevados.

La violencia sexual sigue formando parte del conjunto de instrumentos de la represión política, y se emplea para intimidar y castigar a los opositores y como táctica para silenciar a las mujeres que participan activamente en la vida pública y política, especialmente en Libia y el Yemen. En el informe se registra además una tendencia perceptible de amenazas digitales en Myanmar, donde el acoso y la incitación al odio en línea iban dirigidos específicamente a mujeres asociadas con el movimiento de resistencia y comprendían la difusión de imágenes sexuales explícitas y la incitación a la violencia.

En el informe de este año se destaca que se ha alcanzado un nivel sin precedentes de violencia letal para

silenciar a las sobrevivientes tras una agresión sexual. En 2023, salieron a la luz informes sobre víctimas de violación que fueron posteriormente asesinadas por sus agresores en la República Democrática del Congo y en Myanmar, lo que demuestra la necesidad de reforzar las capacidades forenses, las investigaciones y los procesos de rendición de cuentas que garanticen la protección de víctimas y testigos. Los proveedores de servicios de respuesta inicial y las defensoras de los derechos humanos tampoco se libraron de ello. Hubo agentes armados que amenazaron a miembros del personal sanitario en el Sudán, y se informó de represalias contra defensores de los derechos humanos en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y otros lugares.

A lo largo del tiempo y del espacio, vemos que la disponibilidad de armas facilita directamente esos ataques. En los incidentes de violencia sexual relacionados con los conflictos se usan armas entre el 70 % y el 90 % de las veces, en particular armas de fuego, según investigaciones de las Naciones Unidas.

En el este de la República Democrática del Congo, la amenaza de violación a punta de pistola sigue siendo una terrible realidad cotidiana que pesa sobre la vida de mujeres y niñas, y obstaculiza sus actividades esenciales de subsistencia y sustento. Durante una incursión en una aldea, combatientes de una milicia armada violaron en grupo a 11 mujeres, robaron sus pertenencias e incendiaron sus casas. A cuatro de las mujeres las mutilaron y asesinaron. Las siete supervivientes fueron trasladados a un centro de salud, pero no recibieron tratamiento médico, ya que la clínica había sido incendiada y asaltada. En la República Centroafricana, las mujeres y niñas que se ocupan de las granjas y los campos se enfrentan al riesgo persistente de ser violadas por los agentes armados itinerantes que se encuentran en la zona. En Haití, las mujeres y niñas que se desplazan al trabajo o a la escuela corren el riesgo de ser víctimas de violaciones colectivas perpetradas por miembros de bandas armadas con armas introducidas, en gran medida, de contrabando desde el extranjero.

Las retiradas aceleradas de las operaciones de paz de Malí y el Sudán han puesto de relieve las cuestiones de las transiciones y las salidas. Las estrategias de gestión de armas son una parte fundamental de la prevención de la aparición y la reaparición de la violencia sexual relacionada con los conflictos en ese tipo de entornos. En 2023 visité la zona fronteriza entre el Sudán y Sudán del Sur, donde mujeres y niñas han sido objeto de violaciones, violaciones colectivas y secuestros por motivos étnicos, mientras los agresores se sentían

envalentonados por la impunidad reinante. Desde el resurgimiento del conflicto en el Sudán, he colaborado con las dos partes citadas en el anexo del informe anual, a saber, las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas Sudanesas. Esas partes están obligadas a tomar medidas específicas para prevenir y abordar la violencia sexual. Además, todos los Estados deben acatar las sanciones impuestas por el Consejo, especialmente el embargo de armas impuesto en Darfur, como parte de los esfuerzos para lograr una paz integral y sostenible.

En el informe que estamos examinando se enumeran 58 partes respecto de las cuales existen sospechas plausibles de comisión de violencia sexual o de ser responsables de patrones de violencia sexual en situaciones que figuran en la agenda del Consejo, la gran mayoría de ellas agentes no estatales. Más del 70 % de las partes que figuran en la lista de este informe son agresoras reincidentes, lo que supone que llevan cinco o más años figurando en el anexo sin que se hayan adoptado medidas correctivas o reparadoras. Es fundamental garantizar la coherencia entre la lista de partes implicadas y las medidas impuestas mediante los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas. Debemos utilizar esas herramientas para impedir que las armas lleguen a manos de los autores de violencia sexual. No existe forma más directa y eficaz de desarticular el arma de la violación y, en última instancia, de prevenir y erradicar esos delitos.

En cuanto al acceso a la justicia, demasiados perpetradores de violencia sexual en tiempos de guerra siguen en libertad, mientras que las mujeres y las niñas viven atemorizadas. Si no se adoptan medidas respecto de esos delitos, ello puede suponer un retroceso tanto para la causa de la igualdad de género como para la causa de la paz. No obstante, el reciente impulso en materia de procesos de justicia transicional infunde cierta esperanza. A modo de ejemplo, cabe mencionar la prórroga de las actuaciones del Tribunal Penal Especial en la República Centroafricana hasta 2028, y la decisión de la Sala de Apelaciones de mantener una condena de 2022 por violencia sexual perpetrada por el líder de un grupo armado sobre la base de la responsabilidad de mando; la apertura del macrocaso 11 en Colombia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en septiembre de 2023 para investigar la violencia sexual y de género, particularmente cuando se perpetra por motivos de orientación sexual o de identidad de género; y la decisión del Gobierno del Iraq, en junio de 2023, de liberar 12 millones de dólares para aplicar la Ley de Apoyo a las Supervivientes Yazidíes, en virtud de la cual se han aprobado unas 1.600 solicitudes de indemnización que benefician

a mujeres yazidíes, turcomanas, shabak y cristianas que fueron mantenidas en cautiverio por el Daesh.

En cada una de esas causas, mi Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos ayudó a las autoridades judiciales nacionales y prestó apoyo técnico en otros contextos pertinentes, como Guinea, Libia y Ucrania.

Se necesita financiación urgente para el fondo fiduciario multipartito para la violencia sexual relacionada con los conflictos, que respalda tanto la labor de mi Equipo de Expertos como la de la red de coordinación interinstitucional que presido, a saber, la Acción de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos. Además, los asesores de protección de las mujeres son una pieza clave en nuestra respuesta operativa, y su capacidad debe consolidarse y reforzarse, particularmente en los momentos críticos de las transiciones y las retiradas de las misiones.

Los flujos ilícitos de armas ejercen un efecto inhibitorio en la capacidad de las mujeres para movilizarse en pro de la paz. Menos de un tercio de las voces que se pronuncian en los foros de control de armas y desarme son de mujeres. Ese flagrante desequilibrio de género es un reflejo de la ausencia constante de influencia de las mujeres en los procesos de paz y seguridad que afectan a su vida. Existen marcos sólidos, como el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos de 2001, y el Tratado sobre el Comercio de Armas de 2013. Sin embargo, hasta la fecha, ningún Estado Miembro se ha negado públicamente a exportar armas o municiones aduciendo que estas podrían emplearse para perpetrar o facilitar actos de violencia sexual y de género, si bien esos instrumentos hacen que sea necesario realizar una evaluación sistemática de ese riesgo.

En cuanto al camino a seguir, en el informe que estamos examinando se recomiendan acciones específicas para frenar el flujo de armas garantizando, en primer lugar, la plena aplicación de los marcos legislativos y políticos pertinentes; en segundo lugar, las estrategias de desarme, desmovilización y reintegración y la reforma del sector de la seguridad en las que se tengan en cuenta las cuestiones de género, mediante la supervisión, rendición de cuentas, verificación de antecedentes, capacitación, códigos de conducta y esfuerzos efectivos para incorporar la igualdad de género en su labor; en tercer lugar, el mantenimiento de los logros alcanzados en materia de desarme, desmovilización y reintegración y de la reforma del sector de la seguridad durante los períodos

de transición y reducción de las misiones, especialmente en lo que respecta a la regulación de la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de las armas pequeñas y las armas ligeras; y, por último, la garantía de la participación significativa de las comunidades afectadas, los defensores de los derechos humanos y los representantes de la sociedad civil en todos los procesos de paz y seguridad, incluidos los relacionados con las transferencias y exportaciones de armas, en los que por norma general no se han tenido en cuenta las cuestiones de género. Es hora de mostrar tolerancia cero con las delegaciones y los debates del sector de la seguridad que están integrados exclusivamente por hombres. Casi un cuarto de siglo después de haberse aprobado la resolución 1325 (2000), la inclusión de la mujer debe entenderse como una obligación, no como una mera aspiración.

Hoy, sabemos más que nunca sobre los factores que favorecen o restringen la violencia sexual relacionada con los conflictos, que constituye un flagelo. Sabemos que las armas ilícitas acarrearán consecuencias negativas a largo plazo para la vida de los civiles inocentes, al tiempo que envalentonan a quienes pretenden sembrar el miedo y persiguen fines delictivos. El debate de hoy pone de relieve la necesidad de armonizar mejor la agenda sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos y la agenda sobre el control de armamentos, como parte de la prevención y la mitigación de riesgos.

No podemos condenar a los autores de actos de violencia sexual en nuestras declaraciones mientras seguimos financiándolos y armándolos a través de nuestras cadenas de suministro. Durante decenios, hemos escuchado decir a supervivientes de la violencia sexual relacionada con conflictos que “ese hombre estaba armado y, por ello, tenía el poder”. Recientemente, documentamos el caso de una joven haitiana de 19 años en Cité Soleil, abordada por hombres enmascarados que le pusieron una pistola en el cuello, la arrastraron a un campo y la violaron y golpearon, mientras la presionaban para que confesara su asociación con hombres a quienes ni siquiera conocía. En 2023, las Naciones Unidas documentaron el caso de una mujer de 60 años de Tigré, en el norte de Etiopía, que fue violada en grupo a punta de pistola por tres soldados mientras se escondía en un campo cercano a su casa. Un proveedor de servicios de primera línea en el estado de Unity, Sudán del Sur, informó a mi Oficina de que los jóvenes ahora están acostumbrados a llevar armas dondequiera que vayan. Los que tienen armas son los que amenazan a las personas y perpetran actos de violencia sexual. Esto hace que el desarme sea un paso clave en la prevención.

De hecho, no podemos abordar la violencia sexual sin modificar la dinámica de poder. A partir de hoy, necesitamos mujeres en la sala, armas sujetas a regulación y embargo, dinero sobre la mesa para los defensores de los derechos humanos y cambios sobre el terreno. Esto consiste en apoyar a los valientes activistas de la sociedad civil que dicen la verdad a los que detentan el poder a punta de pistola, sin permitir nunca que las amenazas los silencien. A este respecto, debemos estar en guardia contra cualquier recurso cínico a la supresión y la exclusión, supuestamente en nombre de la protección. El objetivo de esta agenda es la participación y los derechos, no el paternalismo y el control. Las mujeres de las regiones del mundo asolados por la guerra necesitan ver esperanza en el horizonte político. Nuestras palabras, nuestros actos y nuestras decisiones en el Salón y fuera de él deben darles motivos de esperanza y contribuir a una paz con justicia, una paz con igualdad de género, una paz con dignidad y desarrollo, y una paz que perdure.

El Presidente (*habla en inglés*): Agradezco a la Sra. Patten por su exposición informativa.

Tiene ahora la palabra la Sra. Ahmadi.

Sra. Ahmadi (*habla en inglés*): Le doy las gracias, Señor Presidente, por la oportunidad de dirigirme hoy al Consejo de Seguridad para abordar la cuestión relativa a la violencia sexual relacionada con los conflictos. Me llamo Niemat Ahmadi y soy la Presidenta y Fundadora del Darfur Women Action Group. Como superviviente del genocidio de Darfur, fundé esa organización en 2009 para empoderar a las supervivientes, tanto en el Sudán como en la diáspora, y prevenir futuras atrocidades.

Hoy, quiero reconocer la resiliencia de las mujeres sudanesas. Sus historias de indecible sufrimiento solo son superadas por los relatos de su valor y determinación. Hace más de un año, el Sudán se vio sumido en una violencia atroz. Mientras las Fuerzas de Apoyo Rápido siguen ocupando y saqueando viviendas civiles, utilizando la violencia sexual, incluidas la violación y la esclavitud sexual, como táctica de guerra, las Fuerzas Armadas Sudanesas lanzan bombardeos con artillería pesada, ataques aéreos y ataques indiscriminados dirigidos principalmente contra viviendas civiles, mercados, puentes, servicios públicos esenciales y rutas de evacuación, sin ningún respeto por la vida humana. El ciclo de violencia en el Sudán muestra un total desprecio por el derecho internacional y puede constituir crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y genocidio.

Hasta ahora, el conflicto ha causado la muerte de entre 10.000 y 15.000 personas solo en El Geneina

—capital de Darfur Occidental —, ha dejado más de 10 millones de desplazados y ha condenado a 18 millones a la inanición, por lo que las Naciones Unidas advierten de que la situación en el Sudán pronto llegará a ser la peor crisis de hambre del mundo. Estas estadísticas apenas son la punta del iceberg. Por desgracia, no se ha notificado en su totalidad el número real de víctimas, pues en el contexto de la crisis, no se ha podido recopilar datos en condiciones de seguridad. El conflicto ha asolado los estados de Darfur, Jartum y Kordofán. La reciente toma violenta del centro del Sudán y el asalto en El Fasher podrían dar lugar a atrocidades masivas mortíferas.

La guerra ha tenido consecuencias devastadoras para las mujeres. Miles de civiles han perdido la vida. De los 25 millones de personas que se enfrentan a una crisis humanitaria catastrófica, las mujeres se ven especialmente afectadas. Las mujeres también representan hasta el 70 % de los desplazados internos. Las violaciones y otras formas de violencia de género son un rasgo definitorio de la guerra actual en el Sudán. En enero, el Grupo de Expertos sobre el Sudán denunció los actos de violencia sexual generalizada y creciente relacionada con el conflicto de Darfur, como el secuestro, la violación y la explotación sexual de mujeres y niñas (véase S/2024/65). El informe subrayaba los actos de violencia sexual cometidos por miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido y las milicias aliadas en todas las zonas bajo su control, así como la persecución de mujeres debido a su etnia masalit. Ese informe no ha hecho más que confirmar los terribles relatos de violencia sexual de los que venimos teniendo noticia desde hace meses contra mujeres de las tribus masalit, fur y zagawa, sobre todo en los campamentos de desplazados internos. A algunas mujeres sus agresores les han dicho que deben alegrarse porque ahora tendrán un hijo árabe. Estas atrocidades, así como incidentes como la reciente masacre de Ardamata, en Darfur Occidental, indican un claro patrón de ataque étnico contra el pueblo masalit y otras tribus africanas.

Me atormentan las horribles noticias de violencia sexual que oigo todos los días. Una noticia que me destrozó el corazón y me conmocionó hasta la médula se refiere a Noura, que fue víctima de violación colectiva cuando solo tenía 12 años. Quedó en estado crítico. Su familia, que tenía dificultades para sobrevivir, tuvo que tomar una decisión imposible: o buscar tratamiento para ella o alimentar a su hermano menor. Al oír eso, Noura levantó la cabeza llorando y le dijo a su madre que no quería seguir viviendo. Son decisiones que ninguna familia debería tomar y que ningún niño debería soportar. La historia de Noura es una de tantas. Mujeres y niñas

han sido violadas en múltiples ocasiones, a veces en presencia de sus padres, esposos e hijos, en un intento por doblegar su voluntad y destruir su dignidad. Esas mujeres y niñas carecen de protección, de acceso a asistencia humanitaria o médica y de un lugar donde acudir en busca de ayuda. Los ataques a instalaciones médicas, las restricciones a las comunicaciones y la obstrucción deliberada de la entrega de ayuda humanitaria por las partes beligerantes dificultan aún más el acceso de las supervivientes a servicios vitales, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Oímos que quedan menos de una docena de obstetras y ginecólogos trabajando en Jartum o en otras zonas. Para empeorar las cosas, el miedo a las represalias por denunciar ha hecho imposible que muchas supervivientes se manifiesten.

Sin embargo, a pesar de esos peligros, las organizaciones de base y dirigidas por mujeres siguen siendo el cabo salvavidas de su pueblo. Ayudan a sus comunidades, documentan atrocidades y velan por que la comunidad internacional mantenga los ojos puestos en el Sudán. De hecho, es su valentía la que traza una línea clara entre la esperanza y la desesperación. Sin embargo, no podrán hacerlo durante mucho más tiempo sin la ayuda del Consejo.

El Consejo no debe permanecer en silencio mientras los actos inhumanos que acabo de describir se siguen produciendo con total impunidad. Merece la pena señalar que, sin la proliferación de las armas, nunca se habrían alcanzado los niveles de violencia sexual que actualmente se observan en el Sudán. Como informó el Grupo de Expertos al Consejo (véase S/2024/65), las partes beligerantes en el Sudán y sus apoyos externos han seguido violando el embargo de armas del Consejo de Seguridad impuesto a Darfur. Y, como dijo la Secretaria General Adjunta DiCarlo al Consejo el pasado viernes (véase S/PV.9611), esa práctica es ilegal e inhumana, y hay que ponerle fin.

Sin embargo, hasta ahora el Consejo de Seguridad no ha condenado de manera explícita esas violaciones ni ha adoptado medida alguna para impedir a los agentes que las cometan. Si el Consejo de Seguridad no llama la atención a quienes socavan las medidas que ha puesto en marcha, estará dando a conocer a los autores que pueden seguir violando el derecho internacional sin consecuencias. Acabar con la impunidad de los crímenes pasados y presentes, incluidos los cometidos contra las mujeres, debe ser una prioridad para el Consejo de Seguridad para alcanzar realmente una paz sostenible en el Sudán.

Por lo tanto, insto al Consejo de Seguridad a que exija a todas las partes que muestren su empeño a favor de un alto el fuego inmediato e incondicional, pongan fin a los ataques contra los civiles y las infraestructuras civiles y permitan un acceso humanitario rápido, seguro y sin obstáculos, de conformidad con el derecho internacional humanitario; a que exija a todas las partes el cese inmediato de todos los actos de violencia sexual y de género y a que obligue a rendir cuentas a sus autores; a que dé prioridad a la creación de una presencia nueva y más fuerte de las Naciones Unidas sobre el terreno para garantizar la protección de los civiles y las operaciones humanitarias en todo el Sudán y documentar las violaciones del derecho internacional; a que garantice que los derechos de la mujer forman parte esencial de todos los procesos penales de rendición de cuentas; a que haga de la violación de los derechos de la mujer y de todas las formas de violencia sexual y de género un criterio explícito para imponer sanciones; a que mantenga y haga cumplir el actual embargo de armas en Darfur y lo amplíe a todo el Sudán y a todas las partes en conflicto, y a que exija y apoye la participación plena, igualitaria, segura y significativa de las mujeres sudanesas en todos los esfuerzos de distensión, consolidación de la paz, humanitarios y de justicia y rendición de cuentas, y en todos los procesos políticos relativos al futuro del Sudán.

Hace dos decenios, cuando el Consejo empezó a ocuparse del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad en Darfur, hizo lo correcto. Movilizó ayuda humanitaria, remitió la situación a la Corte Penal Internacional, creó una misión de mantenimiento de la paz para proteger a las personas vulnerables, estableció un régimen de sanciones para designar y hacer rendir cuentas a quienes violaran el derecho internacional e impuso un embargo de armas donde era necesario. Ahora no queda ninguna misión de las Naciones Unidas en el país, no se ha incluido a ninguna nueva persona en el régimen de sanciones y el embargo de armas del Consejo es limitado y se incumple con impunidad. En este contexto actual, vemos poca solidaridad con el pueblo del Sudán.

Llevamos más de 23 años oyendo las promesas del Consejo de que se deben cumplir los derechos de las mujeres y poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos. Lamentablemente, esas promesas siguen sin hacerse realidad. Reitero hoy que todas las violaciones de los derechos de la mujer, independientemente de quién sea el autor y de dónde se produzcan, merecen la condena del Consejo y justifican la adopción de medidas y la rendición de cuentas, ya sea en Gaza o en Israel, en la República Democrática del Congo, en

Myanmar, en el Afganistán o en los demás conflictos numerosos en los que las mujeres pagan el precio de la guerra. La inacción de la comunidad internacional en mi país, el Sudán, y en todos esos otros contextos debe ser una mancha en nuestra conciencia colectiva. Solo el Consejo tiene poder para cambiar eso. Ruego a los miembros que adopten medidas ahora.

El Presidente (*habla en inglés*): Agradezco a la Sra. Ahmadi por su exposición informativa.

Tiene ahora la palabra la Sra. Gurira.

Sra. Gurira (*habla en inglés*): Ochenta céntimos —¿cuándo fue la última vez que los miembros del Consejo tuvieron 80 céntimos en la mano, o pagaron por algo y eso fue todo lo que costó? Hoy en día no basta ni para comprar un paquete de chicles, pero sí para comprar a un niño al que violar en la llamada *maison de tolérance* de un campamento de desplazados internos en el este de la República Democrática del Congo.

Ese es el mundo en el que aún vivimos: un mundo en el que las zonas de conflicto son zonas de terror para mujeres y niños. Mi primer contacto con este grave problema se produjo cuando, como dramaturga, empecé a tratar de crear una historia que diera mayor resonancia a las voces de las mujeres y niñas atrapadas en el punto de mira de la guerra. Era la guerra civil de Liberia. Estaba a la busca de sus voces no oídas, y el resultado se convertiría en mi obra de Broadway *Eclipsed*. Con la ayuda de una amistad de las Naciones Unidas que, por aquel entonces, trabajaba en la Oficina de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, visité Liberia y pasé tiempo con mujeres que habían sufrido atrocidades impensables y que deseaban ser escuchadas, participar en el proceso de cambio, tener la oportunidad de una vida plena y curarse de todo lo que les habían arrebatado: mujeres que reclamaban justicia. Ahora, 17 años después, me entristece decir que el cambio que todos esperábamos no se ha producido.

Lo que me alarma es cómo esos delitos se están cometiendo en todo el mundo, lo vasto y extendido que se ha vuelto el problema. El informe (S/2024/292) abarca 25 situaciones problemáticas, desde Colombia a Ucrania, pasando por Israel y los territorios palestinos ocupados, Haití y, más cerca de mí como zimbabuense, la República Democrática del Congo, Etiopía, la República Centroafricana y el Sudán. Este problema se ha extendido a más países, no menos.

Los medios de comunicación son nuestro principal filtro para configurar nuestra percepción y comprensión

de la magnitud y el alcance de esas violaciones. Sin embargo, la realidad de nuestros medios de comunicación es que se centran en algunos lugares, y desde luego no en los lugares donde las mujeres se parecen a mí. Este debate tiene que ser la ocasión en la que escuchemos a la valiente juventud sudanesa que se dedica a la consolidación de la paz, como es el caso de Niemat Ahmadi, en la que escuchemos y veamos a la niña que fue atada a un árbol en Etiopía. Este debate es para ese niño del burdel cercano al campamento de desplazados internos del este de la República Democrática del Congo.

Debemos reconocer a las mujeres y supervivientes de todo el mundo. No hay nada más peligroso que los delitos que no se reconocen, que no se ven y que se permite que persistan. Hoy me encuentro en el Salón para dar mayor amplitud a las voces de quienes nunca se ven ni se oyen, para reconocer su sufrimiento, para asegurarme de que no son olvidados y para pedir cuentas a quienes permiten que esto continúe.

Hace casi exactamente un año estalló la guerra civil en el Sudán: el 15 de abril, durante el mes de ramadán. En este Salón, una valiente mujer sudanesa llamada Hala al-Karib contó a los miembros del Consejo que ese mismo día se había registrado la primera violación colectiva perpetrada por hombres armados, en el domicilio de una mujer en Jartum, al mediodía, seguida al poco rato por dos violaciones más en esa misma zona de la ciudad (véase S/PV.9452). Desde entonces, no han cesado las denuncias de violencia sexual y de esclavitud sexual.

Aunque la República Democrática del Congo figura todos los años en los informes y debates anuales, el número de víctimas y de supervivientes sigue aumentando. Los proveedores de servicios sanitarios y el personal de Médicos sin Fronteras han llegado a prestar asistencia hasta a 70 víctimas diarias en los campamentos de desplazados internos próximos a Goma.

En 2020, solo cinco días después de mi primera exposición ante el Consejo, estalló la guerra civil en Etiopía, donde se cometen atrocidades estremecedoras y donde los soldados, tanto eritreos como etíopes, perpetran despiadadas violaciones colectivas de mujeres, con frecuencia en público, y exhiben a sus víctimas atadas a los árboles. Además, la impunidad es generalizada. El resultado es que no hay ningún tipo de justicia para quienes sobreviven. Se calcula que 10.000 supervivientes de violencia sexual han requerido atención en centros sanitarios, lo que es solo un pequeño porcentaje de la cifra total de víctimas, ya que muchas personas supervivientes no llegan a solicitar atención, y otras

muchas quieren hacerlo pero no la encuentran. En Jartum, que antaño fue una ciudad próspera para las profesionales africanas, ahora se registran actos de violencia sexual dirigidos contra mujeres activistas, profesoras, profesionales de la salud y estudiantes.

¿Cómo podemos combatir eficazmente este problema? Malta nos invitó a considerar una cuestión que forma parte de la respuesta: las armas. En la actualidad hay más servicios que antes para las personas supervivientes y más profesionales que antes dedicados a este tema, pero no hacemos más que nadar contracorriente, sin llegar a ninguna parte. Además, la dificultad se agudiza por los nueve años consecutivos en los que ha ido subiendo el gasto militar, hasta alcanzar un máximo histórico de más de 2,4 billones de dólares. Quienes cometen actos de violencia sexual en tan alto grado en el Sudán, en la República Democrática del Congo, en Etiopía o en Haití, por citar solo algunos lugares, van armados hasta los dientes, ya que hay infracciones flagrantes de los embargos de armas. Se habla mucho de la perturbación de la cadena mundial de suministro, pero las armas no dejan de fluir.

Cuando el escenario está preparado, los actores empiezan a actuar. Es algo que conozco bien, ya que me dedico al teatro. La economía militar prepara el escenario. Los actores tienen lo que necesitan y desempeñan su papel. La violencia sexual está imbricada de una manera intrínseca y atroz en las instrucciones escénicas de la guerra.

¿Por qué parece que las cosas van a peor, a pesar de que las Naciones Unidas han redoblado esfuerzos para hacer frente a la violencia sexual relacionada con los conflictos en los tres lustros transcurridos desde que escribí *Eclipsed*?

¿Cómo pueden las palabras que la comunidad internacional pronuncia en este Salón o los pequeños programas que las Naciones Unidas dedican a las zonas en conflicto competir con los 2,4 billones de dólares de gasto militar y con los niveles históricos de ventas de armamento? Si sumamos toda la ayuda bilateral que reciben las organizaciones y los movimientos feministas, dirigidos por mujeres o que defienden los derechos de las mujeres en los países afectados por conflictos, no llegamos a 150 millones de dólares en el último año del que tenemos datos. Dicho de otro modo, esa ayuda equivale a menos del 0,01 % del gasto militar mundial.

El caso es que invertir la trayectoria ascendente del gasto militar sería una manera de reducir, en primer lugar, el número de víctimas necesitadas de ayuda. El caso es que trabajar en el control de armamento y la

gestión de municiones es también trabajar para prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos. Las armas son uno de los factores que permiten esos crímenes. Eso es indiscutible.

Debo decir, sin embargo, que “reducir el número de armas” no ataja la psicosis de quienes ejercen este tipo de violencia. Disminuir su incidencia no tiene que ver solamente con las armas, aunque las armas, sin duda, tienen un papel que se debe abordar. En pocas palabras: la violencia sexual en los conflictos existía mucho antes de que existieran las armas semiautomáticas. Ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales para quebrantar y dominar, para tomar el poder y el control y para destruir. La patología de esa violencia se manifiesta en múltiples capas y de una manera extremadamente compleja, y tenemos que atacarla a todos los niveles y en todo momento.

La cuestión que más me indigna y preocupa y que siempre he señalado como algo que requiere medidas mucho más contundentes que las que aplicadas en la actualidad es, como se mencionó, la de la impunidad. En los hechos documentados en el informe del Secretario General y en los numerosos testimonios de las valientes personas supervivientes, vemos a aquel comandante que cometió esos actos y quedó libre gracias a su poder político, su dinero y su capacidad de intimidación; a aquellos soldados que aterrorizaron un hogar, una escuela y una comunidad sin que hubiera consecuencias, y a aquellos Gobiernos que dan rienda suelta a sus soldados para que siembren el terror. Todo ello sucede en innumerables ocasiones. Además de una cuestión de armas, es una cuestión de disuasión. La impunidad —la certeza de que se puede violar a una madre, a una hija, a un hijo, a un niño o una niña pequeños, y salir impune— da alas a una patología que hace que este terrible fenómeno vaya en aumento. Al parecer, no hemos encontrado el modo de crear un elemento disuasorio que realmente impida su perpetuación.

Sabemos que esos elementos disuasorios existen. Sin embargo, la complicidad que rodea a la violencia sexual, como acto de rapiña o como consecuencia inevitable de la guerra, parece disuadir a varias estructuras a la hora de responsabilizar plenamente a las partes implicadas. Aunque la Corte Penal Internacional se ha hecho cargo de algunos casos de violencia sexual, violar en medio del caos de los conflictos sigue siendo, en gran medida, una práctica que no acarrea consecuencias.

Quisiera dirigirme a los Gobiernos aquí presentes que permiten que ello suceda con impunidad dentro de sus fronteras. Si se niegan a proteger a las personas más

vulnerables y permiten que sus cuerpos sean objeto de rapiña en sus conflictos políticos, deberán rendir cuentas. Además, no deberían ocupar una posición de liderazgo.

Hay que poner fin a las culturas de la impunidad: la idea de que eso se puede hacer porque probablemente no acarreará consecuencias, porque es la práctica esperada de la guerra. Hay que llevarlo ante los tribunales de justicia. La rendición de cuentas ha de estar garantizada. Además, tiene que haber un cambio en las culturas dominadas por los varones: aquellas en las que los hombres no se consideran responsables ni responsabilizan a otros varones por la comisión de estos delitos. Aquellas donde los dirigentes y sus ejércitos toleran esta atrocidad cometida contra sus propios ciudadanos. A pesar de todos los esfuerzos realizados en los dos últimos decenios para lograr la justicia de género, la terrible verdad es que casi todos los agresores siguen convencidos de que pueden salirse con la suya, y la inmensa mayoría de las personas supervivientes no llegan a buscar justicia, porque pocas veces la hay en su caso. Los dirigentes de sus países no defienden la justicia. Ni siquiera condenan esta terrible práctica, ni velan por que se haga justicia. Aún no ha habido ningún cambio fundamental en la perversa ecuación que asigna más consecuencias a la persona superviviente que a su verdugo.

Mientras no quede claro que la violación tiene consecuencias —consecuencias reales y duras—, no logremos cambiar las cosas.

Quiero hacer una pregunta a los Estados Miembros presentes en el Salón en los que se comete esta atrocidad, a aquellos Estados Miembros cuyos propios soldados oficiales perpetúan estos hechos: ¿acaso es este un mecanismo ineludible en los conflictos? ¿Acaso librar sus guerras sobre los cuerpos de las personas más vulnerables es una táctica bélica? ¿Qué se está haciendo, haciendo de verdad, para evitarlo, para hacer justicia, para disuadir la futura comisión de esas atrocidades? Los miembros tienen que responder a esta pregunta, y tienen que responder a esa niña etíope que ahora mismo no sabe si llegará al final de la semana sin que la aten a un árbol. En estos momentos, una niña en la zona oriental del Congo necesita que sigamos combatiendo este problema de múltiples maneras, en particular garantizando el desarme, luchando contra la impunidad y logrando que triunfe la verdad. Necesita que seamos implacables e imparables, de lo contrario seguirá viviendo una vida de sufrimiento indecible que se vende a apenas 80 céntimos la noche.

El Presidente (*habla en inglés*): Doy las gracias a la Sra. Gurira por su exposición informativa.

A continuación, formularé una declaración en calidad de Vice Primer Ministro de Malta.

Empiezo dando las gracias a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Patten, por su dedicación a la eliminación de la violencia sexual relacionada con los conflictos. Hago extensivo mi agradecimiento a la Sra. Danai Gurira, Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Mujeres, y a la Sra. Niemat Ahmadi, exponente de la sociedad civil.

Como ha señalado muy claramente la Sra. Gurira, en 2023 el gasto militar mundial superó la estremecedora cifra de 2,4 billones de dólares. Por lo tanto, convergemos en el debate crucial de prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos mediante la desmilitarización y el desarme, principios fundamentales de las Naciones Unidas en torno a los que gira la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad.

Ahora, nuestro objetivo es catalizar la dinámica e intercambiar mejores prácticas para aprovechar las estrategias de control de armamentos y desarme con el fin de prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos. También conviene aumentar el liderazgo y la influencia de las mujeres en los foros de desarme, donde sus voces suelen estar infrarrepresentadas.

La proliferación de más de 1.000 millones de armas pequeñas y armas ligeras en todo el mundo alimenta el terrorismo, la delincuencia organizada y los conflictos. También contribuye directamente a la violencia sexual relacionada con los conflictos. Por ello, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer estipula una regulación rigurosa de los armamentos. Por ello, el Tratado sobre el Comercio de Armas prohíbe las transferencias de armas que puedan facilitar la violencia de género. Por ello, el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos recomienda que en los mecanismos nacionales de control de armamentos se disponga una vigilancia y un análisis que tengan en cuenta las cuestiones de género.

Los defensores de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad deben dar ejemplo frenando el gasto militar y deteniendo las exportaciones de armas a zonas de conflicto. Malta fue uno de los primeros signatarios del Tratado sobre el Comercio de Armas e instamos a todos los Estados restantes a que lo firmen, lo ratifiquen y lo apliquen plenamente.

El llamamiento de la Unión Africana a silenciar las armas merece todo nuestro apoyo. Sin embargo, como

se ha dicho hoy, en el Sudán, el suministro ilícito de armas y las complejas redes de financiación contribuyen a la violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas, al tiempo que violan flagrantemente el embargo de armas. Hace ya un año que estalló este brutal conflicto y no se han incluido nuevas entidades en la lista, a pesar de que el Grupo de Expertos del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán ha informado detalladamente de esas violaciones atroces.

Más del 70 % de las partes incluidas en la lista del informe del Secretario General (S/2024/292) llevan años eludiendo la rendición de cuentas. En Israel y Palestina, como en el resto del mundo, deben condenarse y contabilizarse todos los actos de violencia sexual relacionados con el conflicto, independientemente de quién los haya cometido.

En el Afganistán, condenamos la persecución sistemática que los talibanes ejercen por motivos de género y los niveles indignantes de violencia sexual y de género. Por ello, Malta apoya la codificación del *apartheid* de género, que permitiría a las víctimas y supervivientes, actuales y futuras, exigir cuentas a los responsables por la totalidad de los delitos cometidos.

Los comités de sanciones de las Naciones Unidas deberían incorporar la violencia sexual y de género como criterio independiente. Los conocimientos y las sesiones informativas sobre género de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos pueden impulsar la labor de los comités para disuadir a todas las partes, incluidos los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privadas, de recurrir a la violencia.

Las defensoras de los derechos de la mujer, como la Sra. Ahmadi, son un ejemplo de valentía y liderazgo. Sin embargo, siguen careciendo de protección y financiación suficientes. Esto es especialmente cierto en el contexto de las retiradas de las Naciones Unidas, donde el espacio cívico sigue reduciéndose y los servicios son limitados. De los 21 países tratados en el informe del Secretario General, las Naciones Unidas solo han desplegado asesores de protección de las mujeres en 8. Podemos hacer más y debemos hacer más.

La violencia sexual relacionada con los conflictos debe ocupar un lugar central en los acuerdos de alto el fuego, las reformas del sector de la seguridad y las iniciativas de control de armamentos. Los programas de desarme, desmovilización y reincorporación sensibles a las cuestiones de género que se han puesto en marcha

en Colombia son un modelo prometedor para prevenir y combatir la violencia sexual en esos contextos.

Las desigualdades estructurales de género, la pobreza y la misoginia alimentan la violencia sexual relacionada con los conflictos. Es necesaria una respuesta colectiva para dismantelar los sistemas patriarcales que limitan la participación plena, igualitaria, significativa y segura de las mujeres en todas las esferas: política, económica, social y cultural.

La Nueva Agenda de Paz nos exhorta a cuestionar y transformar las normas de género y las barreras institucionales arraigadas. Acatemos esa exhortación. Debemos unirnos para prevenir y combatir la violencia sexual relacionada con los conflictos, velando por que la paz y la seguridad prevalezcan para todos.

Vuelvo a asumir las funciones de Presidente del Consejo.

Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración.

Sra. Baeriswyl (Suiza) (*habla en francés*): Señor Presidente: Le agradezco que haya organizado este debate, que nos plantea la cuestión de cómo prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos, uno de los delitos más frecuentes y graves, que, como se acaba de señalar, casi siempre queda impune. Esto tiene que cambiar. También doy las gracias a las tres exponentes, en particular a la Sra. Ahmadi por su conmovedor testimonio y su valentía. Nuestro mensaje a las mujeres sudanesas es que no las olvidaremos.

La agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad es, ante todo, una agenda de paz: usted nos lo ha recordado, Señor Presidente, al situar el desarme y la desmilitarización en el centro de este debate. Se ha subrayado que la dimensión de género del desarme y el control de armamentos está anclada en un marco normativo sólido que la comunidad internacional debe, sin embargo, aplicar de forma más sistemática.

El carácter pionero de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad radica en la unión de tres pilares: la prevención, la protección y la participación. Estos pilares no solo se refuerzan mutuamente, sino que pueden fortalecerse mediante el desarme y el control de armamentos.

Quisiera hacer algunas observaciones muy concretas al respecto.

Ante todo, para prevenir el comercio ilegal y el abuso, que alimentan la violencia, en general, y la violencia

de género, en particular, las corrientes de armas deben ser más responsables y transparentes. Hay varias formas concretas de conseguirlo. Como se señaló en una reunión organizada el mes pasado por Suiza con arreglo a la fórmula Arria, debemos aplicar mejor las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Históricamente, esas recomendaciones han requerido que se rindan cuentas por la exportación de armas en contextos en los que la violencia de género es generalizada.

También necesitamos información fidedigna para reforzar las capacidades de alerta temprana, actuación rápida y rendición de cuentas. Es necesario recopilar más datos sobre el uso de armas y municiones, incluidas las armas y municiones desviadas. La recopilación de datos y la capacidad de vigilancia deben ser prioritarias para las misiones de las Naciones Unidas, en particular en contextos de transición.

A nivel nacional, debemos integrar el desarme y el control de armamentos en los planes de acción para la aplicación de la resolución 1325 (2000) e integrar un enfoque de género en nuestras estrategias de desarme.

La prevención de la violencia y la erradicación de la violencia de género también se ven obstaculizadas por la persistencia de normas sociales discriminatorias, a menudo asociadas a modelos de masculinidad nefastos que vinculan el ejercicio del poder a la portación de armas.

En segundo lugar, debemos centrarnos en la participación. Las normas mencionadas amplían la brecha de participación, impidiendo así que las mujeres contribuyan plenamente a las decisiones relativas a la paz y la seguridad sin temor a ser objeto de ataques o a que se cuestionen sistemáticamente su papel y sus acciones. En este sentido, debe incrementarse la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en los foros que se ocupan del desarme, el control de armamentos y el comercio de armas. Esto también se aplica a la gestión de nuevas armas y al uso de la inteligencia artificial en el sector de los armamentos. La participación de las mujeres es esencial para transformar la dinámica de poder de género que alimenta la violencia.

Por último, quisiera referirme al pilar de la protección, recordando la necesidad de utilizar mejor las herramientas definidas por el marco normativo para proteger a la población civil de la violencia y las armas. Se sigue transfiriendo y desviando una gran cantidad de armas y municiones a varios de los países mencionados en el informe del Secretario General (S/2024/292), a pesar de los índices muy altos de violencia sexual y de género y

del papel bien documentado de las armas en dicha violencia. Los embargos de armas no se respetan ni se aplican suficientemente. Todos los exportadores de armas y municiones deben cumplir urgentemente sus responsabilidades en materia de diligencia debida integrando una perspectiva de género, como se estipula en particular en el Marco Global para la Gestión de las Municiones Convencionales durante Todo el Ciclo de Vida. Ello debe incluir una evaluación de los riesgos de toda la cadena de suministro, y puede complementarse con la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil.

Tenemos el deber de hacer todo lo posible para reducir la violencia contra las mujeres. La agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad nos proporciona un marco claro basado en tres pilares: la prevención, la participación y la protección. El control de armamentos y el desarme son un poderoso elemento para reforzar esos pilares, y podemos —y debemos— utilizarlo para poner fin a la violencia y la impunidad.

Sr. Sangjin Kim (República de Corea) (*habla en inglés*): Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a Malta por organizar este debate, a la Representante Especial del Secretario General Patten por su exposición informativa y a las Sras. Niemat Ahmadi y Danai Guri-ra en particular por sus conmovedores testimonios.

Las exponentes acaban de proporcionar algunas estadísticas pertinentes sobre estas cuestiones críticas, pero permítaseme empezar destacando de nuevo una estadística especialmente desalentadora. En un momento en que se observa una escalada de conflictos en todo el mundo, se estima que los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos solo en este último año superan los 3.600. Esto representa un sorprendente aumento del 50 % respecto de los 2.455 casos de que informaron las Naciones Unidas en 2022. Detrás de esas cifras también se esconden el sufrimiento y el trauma inimaginables que soportan las víctimas y los supervivientes. Sin embargo, es importante reconocer que es probable que esas cifras sean una subestimación significativa, ya que muchos casos no se denuncian ni se verifican. A este respecto, Corea acoge con satisfacción el informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos (S/2024/292), que ha vuelto a arrojar luz sobre esta cuestión crítica. El informe muestra que, cuando se intensifican los conflictos, también lo hace la trágica prevalencia de la violencia sexual relacionada con ellos.

Los ataques de Hamás contra ciudadanos israelíes y las posteriores hostilidades en Gaza causaron un enorme sufrimiento a las mujeres tanto en Israel como en Gaza,

incluida la atroz violencia sexual contra mujeres israelíes descrita en el informe de la Representante Especial del Secretario General Patten. Asimismo, la escalada de violencia y los conflictos armados en la República Democrática del Congo, el Sudán y Haití han hecho que las mujeres se vean expuestas a los niveles más graves de violencia de género, incluida la violencia sexual. Nos preocupa profundamente el efecto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y las niñas, que sufren las formas más brutales de violencia.

La proliferación y la disponibilidad generalizada de armas pequeñas y armas ligeras ilícitas no hacen más que facilitar la aparición sistemática de la violencia sexual en los conflictos. En ese contexto, quisiera subrayar los tres aspectos siguientes.

En primer lugar, cada miembro del Consejo debe aplicar plenamente y aprovechar las sinergias entre los tratados y marcos internacionales de control de armamentos para minimizar los riesgos inmediatos de violencia sexual relacionada con los conflictos, que se ven acrecentados por la transferencia irresponsable y el tráfico ilícito de armas. A este respecto, Corea insta a todos los Estados Miembros a que incorporen plena y eficazmente la perspectiva de género en sus actividades de control de armamentos, en consonancia con sus obligaciones internacionales, incluidas las contraídas en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas; el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos y el Marco Global para la Gestión de las Municiones Convencionales durante Todo el Ciclo de Vida, aprobado recientemente, por citar solo algunos instrumentos. El Tratado sobre el Comercio de Armas, en particular, es el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante que reconoce la relación entre la violencia de género y el comercio internacional de armas. Al ocupar la Presidencia de la Novena Conferencia de los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas, celebrada el año pasado, destacamos la importancia de la universalización y la aplicación efectiva del Tratado sobre el Comercio de Armas. Corea seguirá empeñada en establecer prácticas responsables en materia de transferencias de armas.

En segundo lugar, debemos hacer todo lo posible por garantizar la participación y el liderazgo plenos, igualitarios, significativos y seguros de las mujeres en los foros de desarme y control de armamentos. Sin duda, las mujeres son partes interesadas fundamentales, y ya es hora de que las palabras se concreten en hechos y respondan a los reiterados llamamientos a la

participación de las mujeres. Tenemos la responsabilidad de garantizar que las voces y perspectivas de las mujeres no queden fuera de los procesos de toma de decisiones en todos los niveles del desarme y el control de armamentos, abarcando mecanismos nacionales, regionales e internacionales.

Por último, además de prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos y abordar sus causas profundas, es igualmente esencial proporcionar un apoyo integral a los supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos. Como hemos escuchado hoy en el vívido testimonio de la Sra. Ahmadi, sus historias de resiliencia, valor y esperanza no deben quedar relegadas a un segundo plano. Al empoderarlas y ayudarlas a convertirse en agentes políticos activos, pueden contribuir a dar forma a las leyes y políticas relativas al control de armamentos y el desarme, aportando sus puntos de vista para evitar que se repitan este tipo de incidentes.

Corea ha puesto en marcha su propia iniciativa Acción con las Mujeres y la Paz para apoyar los esfuerzos mundiales encaminados a poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos y potenciar la participación de las mujeres en los procesos de paz. Por un lado, en el marco de esa iniciativa, Corea ha venido apoyando proyectos humanitarios y de desarrollo para mitigar los riesgos de violencia de género en África, como en el Sudán y el Camerún, en estrecha colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, desde 2019 celebramos conferencias anuales sobre Acción con las Mujeres y la Paz, fomentando debates mundiales sobre la agenda de las mujeres y la paz y la seguridad, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos. Además, este año pusimos en marcha el fondo Acción con las Mujeres y la Paz para apoyar a las mujeres activistas, constructoras de la paz y trabajadoras humanitarias que desempeñan un papel crucial en la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos y la adopción de medidas para hacerle frente.

Para concluir, la promoción de medidas de control de armamentos y desarme que tengan en cuenta las cuestiones de género, además de incorporar plenamente la dimensión de género en los debates pertinentes, es una parte crucial de nuestros esfuerzos colectivos para prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos. Corea mantiene su firme respaldo a esta causa y está dispuesta a participar y colaborar activamente con todos los miembros del Consejo.

Sra. Karim (Sierra Leona) (*habla en inglés*): Damos las gracias a Malta por haber convocado este debate

abierto. Damos las gracias también a las exponentes, la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Sra. Pramila Patten; la Fundadora y Presidenta de Darfur Women Action Group, Sra. Niemat Ahmadi; y la Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Mujeres, Sra. Danai Gurira, por sus exhaustivas exposiciones y por los valientes esfuerzos que despliegan para impulsar la acción mundial que tanto se necesita para hacer frente a la violencia sexual relacionada con los conflictos.

Tras haber experimentado de primera mano el efecto devastador de la violencia sexual relacionada con los conflictos en las personas y las comunidades, Sierra Leona mantiene su firme determinación de sumarse a los esfuerzos proactivos para prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos mediante la desmilitarización y un control de armas en el que se incorporen las cuestiones de género. La prevalencia de la violencia sexual relacionada tanto con situaciones de conflicto como de paz es alarmante. En los conflictos actuales, se han denunciado casos escalofriantes de mujeres, hombres, niñas y niños de distintas edades que han sido atacados deliberadamente y objeto de agresiones sexuales. Sacar a la luz, en nuestros debates, este delito que se ha ocultado históricamente es la única manera de abordarlo.

Sierra Leona toma nota con agradecimiento del importante informe del Secretario General (S/2024/292), en el que se exponen los progresos realizados y las cuestiones emergentes en relación con la violencia sexual en las zonas afectadas por conflictos durante el período que abarca el informe, así como recomendaciones orientadas al futuro destinadas a reforzar los mecanismos para el cumplimiento por los agentes estatales y no estatales de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión fundamental. Hemos tomado nota, con gran preocupación, de las listas que figuran en el anexo de partes sobre las que pesan sospechas fundadas de ser autoras o responsables de actos sistemáticos de violación u otras formas de violencia sexual en las situaciones de conflicto armado que figuran en la agenda del Consejo de Seguridad. En particular, nos consterna constatar que las mujeres sudanesas están experimentando de forma aguda el efecto de la escalada del conflicto y se enfrentan a una serie de riesgos: secuestros, violaciones, explotación sexual y matrimonios forzados. Exhortamos a todos los Estados Miembros a que detengan las transferencias de armas cuando exista un riesgo sustancial de que estas se puedan emplear para perpetrar o facilitar actos graves de violencia contra mujeres y niños en el Sudán y en todas las situaciones

de conflicto. Tenemos la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la resolución 2724 (2024). Reiteramos la necesidad de que se logre el cese inmediato de las hostilidades en el Sudán y exhortamos a las partes a que respeten el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

La carga que soportan las mujeres y las niñas merece especial atención. De los 3.688 casos verificados de violencia sexual relacionada con los conflictos en más de 21 situaciones destacadas en el presente informe, el 95 % afectan a mujeres y niñas. En las situaciones de conflicto son, sobre todo, los cuerpos de las mujeres y las niñas los que se han convertido en campos de batalla, no por las bombas y los proyectiles, sino por las manos y mentes humanas desalmadas de grupos armados de agentes estatales y no estatales que siguen aprovechando la anarquía de las guerras para infligir violencia a los miembros más vulnerables de nuestras comunidades. Las mujeres son despojadas de sus derechos, violadas, torturadas, secuestradas y humilladas, y muchas son condenadas al ostracismo al final de los conflictos porque cargan con las repercusiones de los abusos, entre las que se incluyen los embarazos. El aumento de la militarización y la proliferación de armas, sobre todo de armas pequeñas y armas ligeras, atiza la aparición sistemática y generalizada de la violencia sexual en los conflictos. Los agresores utilizan armas y municiones para cometer violaciones, amenazar u obligar a las personas a realizar actos sexuales contra su voluntad y herir y matar a supervivientes y víctimas de la violencia sexual.

Como se indica en la nota conceptual para este debate, según un estudio realizado por el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme en seis países en 2021, entre el 70 % y el 90 % de los incidentes de violencia sexual se emplearon armas, en particular armas de fuego. Por consiguiente, el papel del control de armamentos y el desarme en la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos reviste suma importancia. A ese respecto, también es necesario reforzar las plataformas de intercambio de información a través de las cuales los Estados Miembros pueden compartir información, buenas prácticas, enseñanzas extraídas y amenazas emergentes asociadas con la violencia sexual relacionada con los conflictos y el papel de las armas. Consideramos que ello fomentará la colaboración y permitirá a los países aprender de las experiencias de los demás.

Sierra Leona cree que hay luz al final del túnel, porque las pruebas dan fe de que la aplicación rigurosa de marcos jurídicos y normativos apropiados reduce

la incidencia de la violencia sexual relacionada con los conflictos. Nuestra voluntad de abordar esta cuestión, por ejemplo, se basa en la experiencia, incluido el desarrollo de una jurisprudencia crucial en el Tribunal Especial para Sierra Leona. En efecto, el Tribunal Especial fue el primer tribunal penal internacional que reconoció el nuevo crimen de lesa humanidad del matrimonio forzado como un acto inhumano más. En la fase de recuperación posconflicto y consolidación de la paz, Sierra Leona sigue demostrando la determinación significativa de abordar la violencia sexual relacionada con conflictos y la violencia sexual y de género, entre otras cosas, mediante la declaración de una emergencia pública nacional debida a las violaciones en 2019. Sierra Leona sigue dando prioridad al enjuiciamiento de los autores, garantizando la rendición de cuentas, al tiempo que reconoce el claro daño infligido a las víctimas y la necesidad de reparación. A ese respecto, deseamos recordar la importancia de la resolución 2467 (2019).

A la luz de lo anterior, Sierra Leona desea hacer hincapié en las tres cuestiones siguientes.

En primer lugar, incidimos en la necesidad de que los agentes estatales y no estatales implicados en un conflicto cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional de proteger a la población civil de la violencia sexual relacionada con los conflictos.

En segundo lugar, pedimos a todos los Estados Miembros y asociados que refuercen las redes de colaboración y cooperación de los instrumentos y tratados de control de armamentos y desarme, incluidos el Tratado sobre el Comercio de Armas y el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos. A ese respecto, creemos que los Estados y otros asociados deben abogar por mecanismos de rendición de cuentas más sólidos, incluida la acción judicial, contra quienes se demuestre que han cometido actos de violencia sexual relacionada con los conflictos, así como por el establecimiento de mecanismos de reparación para las víctimas. Los mecanismos mundiales, regionales y nacionales para el control de armamentos y el desarme deben tratar de hacer que las supervivientes de la violencia de género, en particular de la violencia sexual relacionada con los conflictos, participen activamente, como partes interesadas principales, y expongan sus opiniones. De manera análoga, el análisis de género y la vigilancia sensible al género deben incorporarse a esos mecanismos para abordar eficazmente las repercusiones en materia de género que ejerce la proliferación de armas pequeñas y las armas ligeras.

En tercer y último lugar, debemos mejorar nuestros esfuerzos para abordar la desigualdad de género sistémica, que puede ser un factor causal de la violencia relacionada con los conflictos, especialmente contra las mujeres y las niñas. A ese respecto, la consecución de los objetivos relacionados con la igualdad de género, la justicia y las instituciones sólidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16, reviste una importancia crucial. Abordar los factores históricos, políticos, culturales, sociales y económicos subyacentes a los conflictos también es fundamental para hacer frente a la violencia sexual relacionada con los conflictos.

Para terminar, Sierra Leona reitera su determinación de proteger a las poblaciones vulnerables y promover los esfuerzos inclusivos a fin de luchar contra la violencia sexual relacionada con los conflictos.

Sr. Yamazaki (Japón) (*habla en inglés*): Agradezco sinceramente a Malta la convocatoria de la importante sesión de hoy. También doy las gracias a la Representante Especial del Secretario General Patten, a la Sra. Ahmadi y a la Embajador Gurira por sus exhaustivas exposiciones informativas y por los denodados esfuerzos que despliegan para sensibilizarnos sobre esta cuestión tan apremiante e importante.

La violencia sexual en los conflictos es un crimen grave que atenta plenamente contra la dignidad humana y nunca debe tolerarse, sea cual sea el lugar del mundo en que se produzca. El Japón está profundamente preocupado y alarmado por las conclusiones recogidas en el último informe del Secretario General (S/2024/292), en el que se indica que están aumentando los niveles de violencia sexual relacionada con los conflictos, atizada por la proliferación de armas y la creciente militarización. Tal y como se recomienda en el informe del Secretario General, debemos mejorar la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos incorporando esta agenda en los marcos de control de armamentos y desarme y aprovechando los mecanismos y herramientas de las Naciones Unidas a ese respecto.

El Japón es un Estado parte en el Tratado sobre el Comercio de Armas desde su entrada en vigor en 2014. El Tratado exige a los Estados partes que evalúen el riesgo de que las exportaciones de armas puedan emplearse para perpetrar actos graves de violencia de género. El Japón ha dado prioridad a la universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas y reitera su llamamiento para que las partes no estatales se adhieran a él. Para reducir el riesgo de que las transferencias de armas y las

armas ilícitas se utilicen para cometer actos de violencia sexual relacionada con los conflictos, debemos reforzar la cooperación internacional a través de marcos como el Foro de Intercambio de Información sobre Desvíos, un órgano del Tratado sobre el Comercio de Armas, en el que se intercambia información sobre transferencias de armas ilícitas. Además, debemos promover la aplicación del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos.

Para promover la cooperación internacional en este ámbito, el Japón ha aportado 2 millones de dólares al fondo de la Entidad Salvar Vidas (SALIENT), iniciativa de las Naciones Unidas puesta en marcha en 2020, que apoya a los Estados Miembros en la lucha contra la violencia armada y las armas pequeñas y las armas ligeras ilícitas. En el proyecto de la iniciativa para reducir las armas ligeras, se destina hasta el 30 % del presupuesto a actividades relacionadas con el género, incluida la prevención de la violencia de género. El Japón espera que SALIENT siga contribuyendo a reducir la violencia de género relacionada con la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras ilícitas.

También debemos garantizar la participación de las mujeres en el ámbito del control de armamentos y el desarme para abordar de manera adecuada la violencia sexual relacionada con los conflictos. Todos los años, junto con Colombia y Sudáfrica, el Japón presenta la resolución de la Asamblea General relativa al tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras. Dicha resolución hace hincapié en la necesidad de una participación igualitaria, plena y efectiva de las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones y de aplicación relacionados con el Programa de Acción sobre las Armas Pequeñas y el Instrumento Internacional de Localización. Invito a todos los Estados Miembros a apoyar y aplicar plenamente dicha resolución.

A nivel nacional, con respecto al tercer plan de acción nacional del Japón sobre las mujeres y la paz y la seguridad, el Japón se compromete explícitamente a promover la participación de las mujeres e incorporar una perspectiva de género en el desarrollo y la aplicación de contramedidas relativas a las armas pequeñas y las armas ligeras, así como otras iniciativas en materia de desarme y no proliferación.

Para concluir, sobre la base los debates de hoy, el Japón reafirma su apoyo a la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos mediante la desmilitarización, el control de armamentos y el desarme.

Sr. Fu Cong (China) (*habla en chino*): Le doy la bienvenida a Nueva York, Señor Presidente, para presidir este debate. Doy las gracias a la Representante Especial del Secretario General Patten y a los demás exponentes por sus exposiciones informativas.

Las mujeres constituyen uno de los grupos más vulnerables. Sus derechos e intereses se violan con más facilidad. Son los más necesitados de protección. China se opone con firmeza al uso de la violencia sexual como medio de guerra y terrorismo, condena enérgicamente toda violencia sexual contra las mujeres y las niñas y pide a la comunidad internacional que adopte un enfoque integral como respuesta. Deseo hacer hincapié en los siguientes aspectos.

En primer lugar, debemos combatir con decisión todas las formas de violencia sexual. Sin castigos efectivos para los actos delictivos, será difícil disuadir y prevenir nuevas violaciones. Todos los países deben reforzar el estado de derecho, castigar con tolerancia cero a los autores de actos violentos conforme a la ley y procurar justicia para las víctimas. Recientemente, Haití ha experimentado un repunte de la violencia de bandas, que se ha traducido en terribles incidentes de violencia sexual, que suponen una grave amenaza a las mujeres y las niñas locales y generan temor entre la población. China hace un llamamiento a todas las partes para que apoyen los esfuerzos de la policía haitiana por mantener el orden público, aplicar estrictamente el embargo de armas, cerrar en origen los canales a través de los cuales las bandas obtienen de manera ilegal armas y municiones, y estabilizar la situación sobre el terreno lo antes posible.

En segundo lugar, debemos hacer todo esfuerzo posible por reprimir las actividades terroristas. En los últimos años, los problemas relacionados con los actos de secuestro, trata de personas y violencia sexual, cometidos por los grupos terroristas en África Occidental, Oriente Medio y otras regiones, se han acentuado cada vez más. Muchos de los actores que figuran en el informe del Secretario General (S/2024/292) como sospechosos de cometer actos de violencia sexual son grupos terroristas que figuran en la lista del Consejo de Seguridad. Corresponde a todas las partes acatar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los países afectados; dar protagonismo pleno a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad; poner fin al doble rasero en la lucha contra el terrorismo; reforzar la cooperación internacional antiterrorista; y combatir de manera resuelta el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

En tercer lugar, debemos promover el desarrollo integral de las mujeres. El problema de la violencia sexual no surge de la nada. Más bien, está estrechamente relacionado con la cuestión del desarrollo. La comunidad internacional debe centrarse en el largo plazo, potenciar la ayuda a los países en desarrollo, acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reforzar el empoderamiento de las mujeres y promover la igualdad de género. Es importante prestar atención a las necesidades especiales de las víctimas de violencia sexual, proporcionarles atención médica y servicios de asesoramiento psicológico oportunos y urgentes y ayudarles a curar el trauma y reintegrarse en la sociedad lo antes posible. China celebra que se haya promulgado leyes y aprobado planes de acción para la protección de las mujeres y los niños en Sri Lanka, Somalia y Bosnia y Herzegovina.

El objetivo último de la agenda sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos no es solo conseguir que los conflictos estén libres de violencia sexual. El objetivo final es liberar al mundo de la guerra. La forma más fundamental de abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos es detener y prevenir la propia guerra. En este momento, el conflicto en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 10.000 mujeres, dura ya más de seis meses. Más de 1 millón de mujeres y niñas palestinas se enfrentan a la inanición. Este desastre humanitario provocado por el hombre debe terminar. Es imperioso promover la aplicación plena y efectiva de la resolución 2728 (2024) para lograr un alto el fuego inmediato en Gaza y poner fin a todas las acciones que perjudican a la población civil. China ha tomado nota del informe publicado por la Representante Especial del Secretario General Patten tras su visita en febrero a Israel por invitación, durante la cual también viajó a la Ribera Occidental ocupada. Esperamos que las partes interesadas se tomen en serio las recomendaciones del informe y respondan positivamente.

China está dispuesta a seguir colaborando con la comunidad internacional para crear un entorno de paz, seguridad y estabilidad en todo el mundo y a contribuir positivamente a la pronta erradicación de la violencia sexual relacionada con los conflictos y la promoción de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad.

Sra. Samai (Argelia) (*habla en inglés*): Quisiera expresar mi gratitud a la Presidencia maltesa por su acertada elección de la violencia sexual relacionada con los conflictos como tema del debate de hoy. También deseo dar las gracias a los exponentes por sus esclarecedoras exposiciones informativas.

A pesar de que han transcurrido 24 años desde que el Consejo aprobó la resolución 1325 (2000), que reconoce el papel vital de la mujer, en especial para prevenir y mitigar los conflictos, seguimos asistiendo a un retraso inaceptable en la aplicación de sus disposiciones. En ese contexto, y para afirmar las observaciones formuladas por el Presidente de la República, Sr. Abdelmadjid Tebboune, durante su participación en el debate general de la Asamblea General en el contexto de su actual período de sesiones (véase A/78/PV.5), mi país aprobó un plan de acción nacional en julio de 2023, con el fin de alcanzar los objetivos de esa resolución de las Naciones Unidas. Dicho plan, elaborado en colaboración con diversos órganos nacionales y partes interesadas pertinentes, tiene como principales objetivos fomentar la participación de las mujeres en los sectores de la seguridad y militar, sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de las mujeres, aumentar la presencia femenina en diversos órganos nacionales, regionales e internacionales, reclutar a más mujeres en los rangos de seguridad y militar, y apoyar el acceso y la promoción de las mujeres a puestos de liderazgo en los organismos de seguridad.

Argelia valora sus logros para potenciar la condición jurídica y social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género, en particular para superar los sistemas de cuotas y sustituirlos por un sistema equilibrado de representación 50/50. Ese paso progresivo refleja nuestro respaldo a la construcción de una sociedad inclusiva y justa en que las mujeres tengan igualdad de oportunidades de contribuir a todos los aspectos de la política, la economía y el desarrollo. Ello se ha reflejado en los importantes avances logrados en cuanto a la presencia y la representación de las mujeres, ya que la participación de las mujeres argelinas en el sector judicial supera el 54 % del total de participantes. Además, las mujeres representan más del 68 % de las personas activas en el sector de la enseñanza superior y el 45 % en el sector de la investigación científica. En cuanto al sector sanitario, las mujeres representan más del 50%. En los sectores militar y de seguridad se está trabajando para igualar los objetivos alcanzados en la categoría de alto rango. Esas estadísticas impresionantes reflejan la eficacia del plan y la visión del Gobierno para empoderar a las mujeres y mejorar su participación en la sociedad argelina.

En mi declaración de hoy sobre este tema tan oportuno, trataré de clarificar dos situaciones.

Las mujeres y las niñas están pagando un alto precio por la crisis del Sudán, que estalló hace un año, y son objeto de violaciones graves. Por lo tanto, es imperativo poner fin con carácter urgente a todas las formas de

violencia sexual y de género y fomentar la creación de los mecanismos de justicia y curación necesarios. También es esencial garantizar la participación significativa de las mujeres en los esfuerzos de paz para asegurar la inclusividad necesaria de todo proceso de paz.

En el mismo contexto, Argelia llama la atención sobre la terrible situación de las mujeres palestinas, que soportan actualmente sufrimientos inmensos y violaciones de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida, de forma brutal y continua, especialmente en los últimos seis meses.

Desde el 7 de octubre, los informes indican que las mujeres y niñas palestinas detenidas han sido objeto de múltiples formas de violencia y agresiones sexuales. Según los titulares de mandatos y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, las mujeres y los niños palestinos, en las zonas donde buscan refugio o mientras huyen, también son objeto de ataques deliberados y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. Esas violaciones deben investigarse a fondo, y todos los autores deben rendir cuentas. La impunidad cero para esos delitos debe ser el principio rector.

El sufrimiento de las mujeres palestinas sirve de recordatorio trágico de la urgente necesidad de que se ponga fin de inmediato a todas las formas de violencia sexual relacionada con los conflictos, como se afirma en la recomendación contenida en el párrafo 93 a) del informe de este mes del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos (S/2024/292).

Sr. Nebenzia (Federación de Rusia) (*habla en ruso*): Hemos escuchado a las exponentes de hoy. Consideramos que vincular el tema de la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos con la desmilitarización y el control de armas, el desarme y la no proliferación, en relación con el tema del orden del día de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, es artificial y desvía la atención de cuestiones verdaderamente importantes que existen en las dos esferas.

La Federación de Rusia condena la violencia sexual en todas sus formas, al igual que todos los demás delitos cometidos en situaciones de conflicto y posconflicto. Semejantes actos deben ser objeto de investigación, y sus autores deben ser enjuiciados. Se trata de una actividad de aplicación de la ley que es competencia de los Estados. Las medidas que adoptan los órganos del sistema de las Naciones Unidas y la sociedad civil no hacen sino sumarse a esos esfuerzos.

Sin embargo, hay que reconocer que la contribución de las Naciones Unidas en ese ámbito se ve considerablemente limitada por el hecho de que el puesto de Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos está ocupado por la Sra. Pramila Patten. La Sra. Patten ha convertido ese mandato importante en una fuente de declaraciones políticas, mentiras descaradas y manipulaciones. Eso es inaceptable.

Un buen ejemplo de esta politización es la sección sobre Ucrania del informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos (S/2024/292). Para empezar, quisiéramos señalar que esta sección del informe no presenta ningún valor añadido. Se limita a reproducir datos de la denominada misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como sabemos, esa misión está totalmente controlada por Kiev, lo que significa que sus datos no pueden considerarse objetivos. No obstante, incluso esa misión recogió algunos crímenes cometidos por militantes ucranianos: palizas, torturas con descargas eléctricas, intimidaciones y violaciones contra sospechosos de colaborar con las autoridades de Donetsk y Luhansk. Sin embargo, ese tipo de información no llegó a incluirse en el informe de la Sra. Patten.

Toda acusación contra Estados o partes en un conflicto que figure en cualquier informe debe ser fidedigna y basarse en hechos corroborados y extraídos de fuentes verificables. Sin embargo, la Representante Especial del Secretario General prefiere incluir acusaciones infundadas contra las fuerzas armadas sin tomarse la molestia de verificar dicha información.

El año pasado, antes de la publicación del informe, Rusia solicitó de manera oficial al Secretario General que facilitara información que pudiera utilizarse para llevar a cabo verificaciones. Se hizo caso de esas solicitudes. Este año, la Representante Especial ni siquiera presentó la parte pertinente del informe a Rusia para comentarla. Por lo tanto, es obvio que entre sus objetivos no figura la prevención de la violencia sexual. Lo único que pretende es distribuir etiquetas políticas.

Por lo tanto, quisiéramos subrayar una vez más que repudiamos plenamente las insinuaciones que figuran en el informe. Los actos de los militares rusos dentro y fuera de las situaciones de combate están sujetos a un mando unificado y a normas y reglamentos estrictos. Todo acto ilícito se investiga de inmediato y los autores son enjuiciados.

Otras secciones del informe están igualmente desequilibradas. En particular, la sección sobre Myanmar vuelve a ser parcial y a estar politizada. En la lista de infractores solo figuran miembros de las fuerzas armadas de Myanmar, mientras que se hace caso omiso de los delitos que cometen los terroristas y militantes. Eso no da fe de la objetividad del informe.

La Federación de Rusia considera que el control de armamentos y el control de los suministros de equipos de uso militar, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras, son un pilar del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, especialmente en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

En este sentido, es importante que quienes toman decisiones sobre cuestiones de seguridad internacional, control de armamentos, desarme y no proliferación, así como quienes participan en actividades conexas, sean evaluados en función de sus capacidades, talentos y méritos, independientemente de su sexo. La agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad no debe incorporarse automáticamente a documentos de las Naciones Unidas que no se refieren a esa problemática, incluidos los relativos al control de armamentos, el desarme y la no proliferación. Por nuestra parte, no vemos cómo el debate sobre un control de armas que tenga en cuenta las cuestiones de género puede contribuir a abordar los problemas reales que afrontan numerosos Estados de todo el mundo, a saber, el acceso cada vez mayor de los terroristas y los grupos delictivos a las armas pequeñas y las armas ligeras, que supera a todas las demás categorías de armas en cuanto al número de víctimas. Ese problema se trata en los informes del Secretario General sobre las amenazas que plantea el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL). Y, sin embargo, esos mismos informes no mencionan de dónde sacan exactamente las armas los terroristas.

El Consejo no debe hacer la vista gorda ante el hecho de que los terroristas obtienen sus armas a través de redes delictivas o directamente de quienes se las suministran por todo el mundo en grandes cantidades. Los terroristas, incluido el EIIL, están utilizando ahora las armas y los equipos que los Estados Unidos y la OTAN dejaron abandonados en el Afganistán, en el sur de Asia y en el propio Afganistán. Las armas enviadas por los Estados occidentales al régimen de Kiev acaban actualmente en manos de grupos criminales en Europa y terroristas en África.

En estos momentos, el Gobierno de los Estados Unidos se ocupa de desembolsar 23.000 millones de dólares

a Ucrania y 26.000 millones a Israel para que puedan reponer sus existencias de armas estadounidenses. Son precisamente esas armas las que se convertirán en caldo de cultivo para terroristas y criminales de todo el mundo y se cobrarán miles de vidas de mujeres y niños.

Hace algún tiempo, Rusia comenzó en el Consejo de Seguridad a desplegar esfuerzos para mejorar las normas existentes en el ámbito de la lucha contra las transferencias de armas a terroristas. En 2017, se aprobó la resolución especializada 2370 (2017) con nuestro respaldo activo. Hemos promovido la inclusión de este tema en la resolución 2462 (2019), sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, y en la resolución 2482 (2019), sobre los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada. En 2018 y 2019 se celebraron en Moscú varias importantes conferencias internacionales sobre este tema.

Pese a ello, la situación no ha mejorado desde entonces, porque las medidas definidas por el Consejo de Seguridad solo pueden aplicarse con una cooperación despolitizada entre los Estados y bajo la coordinación central de las Naciones Unidas, lo que en estos días es poco habitual.

Rusia defiende el fortalecimiento de la interacción y la coordinación entre los mecanismos especializados competentes de la Secretaría de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. A instancias de mi país, la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pusieron en marcha programas de asistencia técnica especializada destinados a afianzar la capacidad de los países de Asia Central para luchar contra el tráfico ilícito de armas, lo que comporta, entre otras cosas, evitar que dichas armas caigan en manos de terroristas. En la próxima fase del proyecto se prestará una asistencia similar a los Estados africanos.

La actual situación mundial evidencia claramente la importancia de controlar las transferencias de armas convencionales y de material militar, en particular de armas pequeñas y armas ligeras. Cabe reconocer que, a pesar de las medidas adoptadas, las mujeres siguen siendo víctimas de diversas formas de violencia y mueren o resultan heridas en los conflictos armados. Debemos encontrar la manera de resolver este problema en los ámbitos que nos ocupan, sin politizaciones ni dobles raseros y sin vincular artificialmente la violencia sexual a las cuestiones de control de armamento, desarme y no proliferación.

Sra. Thomas-Greenfield (Estados Unidos de América) (*habla en inglés*): Permítaseme comenzar mi

intervención dando las gracias a Malta por haber organizado este importante debate. Quiero dar las gracias también a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Patten, y a su equipo por su exhaustiva exposición informativa y por su informe (S/2024/292). Aplaudo los esfuerzos que lleva a cabo la Representante Especial, que abarcan también Ucrania, motivo por el cual mi colega ruso ha pensado que debía centrar su declaración en atacarla.

Quiero dar las gracias también a la Sra. Gurira, Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Mujeres, por su contundente declaración y por su presencia hoy con nosotros, así como expresarle mi gratitud por la labor que lleva a cabo en torno a esta cuestión.

Este mes se cumplen 10 años de los secuestros de Chibok, en Nigeria. Recuerdo muy bien aquel día, ya que en ese momento era la Subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos de los Estados Unidos, y recuerdo la indignación. Han pasado 10 años desde que Boko Haram raptó a más de 270 muchachas en sus residencias de estudiantes y las obligó a llevar una vida de esclavitud sexual y servidumbre doméstica, apartándolas de sus familias, sus vidas y su futuro. A día de hoy, un tercio de esas niñas continúan en paradero desconocido.

Quisiera poder decir que aquel horrible secuestro marcó un punto de inflexión y que fue la última muestra de este tipo de violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, como deja patente el informe de este año, seguimos sumidos en una crisis mundial de violencia sexual relacionada con los conflictos. En un país tras otro, la impunidad sigue siendo la norma. De Nigeria a Israel, de Myanmar al Sudán, de Haití a la República Democrática del Congo, vemos cómo grupos terroristas, bandas delictivas y grupos armados no estatales secuestran y explotan sexualmente a mujeres y niñas. Vemos cómo se utiliza la violación como herramienta de guerra.

Tomo nota de que en el informe se reclama la liberación de casi 3.000 yazidíes que continúan en paradero desconocido, así como de los rehenes que fueron secuestrados por Hamás y otros grupos terroristas en Israel el 7 de octubre. Sabemos, por los informes de las Naciones Unidas, que muchos de esos rehenes han sido objeto de violencia sexual durante su cautiverio.

Queda mucho trabajo por hacer para combatir esta epidemia de violencia, para abordar tanto sus repercusiones como sus causas profundas y, lo que es más importante, para ayudar a las personas supervivientes a recuperarse. En todo caso, hoy quiero centrarme en tres

medidas fundamentales que se detallan en el informe que tenemos ante nosotros.

En primer lugar, hay que asegurar que los autores de actos de violencia sexual relacionada con el conflicto rindan cuentas. Los Estados Unidos coinciden con la conclusión de la Representante Especial, en el sentido de que la comunidad internacional debe ayudar a las autoridades nacionales a fortalecer las instituciones del estado de derecho y desarrollar su capacidad forense con miras a que los investigadores puedan recabar debidamente las pruebas necesarias para procesar y condenar a quienes hayan perpetrado actos de violencia sexual relacionada con un conflicto. A tal fin, deseo encomiar la labor que lleva a cabo el Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos, que organiza sesiones de formación y presta asistencia a los Gobiernos nacionales para la creación de capacidades jurídicas y forenses. Quiero reconocer también las iniciativas emprendidas en Sierra Leona y sumarme a la declaración de ese país, en la que se recomienda establecer mecanismos de rendición de cuentas más sólidos.

Los Estados Unidos participan también en esa labor crucial. En Haití, por ejemplo, en el marco de la estrategia estadounidense para prevenir los conflictos y promover la estabilidad en ese país, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional trabajan en colaboración para prestar apoyo a la Policía Nacional de Haití, ayudándola a fomentar la confianza de las comunidades a las que sirve y formando a sus agentes para mitigar la violencia de género, darle respuesta e investigar los casos. En Ucrania, los Estados Unidos apoyan la labor de la Fiscalía General encaminada a documentar, investigar y enjuiciar crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas, en particular los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto.

Ahora bien, se trata de una labor que requiere la participación de todos. Casi una de cada tres mujeres ha sido o será objeto de violencia sexual en el curso de su vida. La enorme magnitud de la crisis obliga a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a trabajar conjuntamente y con el Equipo de Expertos, compartir mejores prácticas y coordinar los recursos colectivos. Más que limitarnos a abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos cuando ya se ha producido, lo que tenemos que hacer es prevenirla.

Eso me lleva a mi segunda observación: es necesario abordar los desafíos sistémicos que permiten, facilitan y exacerban la violencia sexual relacionada con el

conflicto, en especial la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras.

Como se señala el informe, entre el 70 % y el 90 % de los incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto registrados en Myanmar, la República Democrática del Congo, el Sudán y Sudán del Sur implicaron el uso de armas pequeñas y armas ligeras. En efecto, la proliferación ilícita y la gran disponibilidad de esas armas y de sus municiones facilitaron directamente esos incidentes.

Es más, la violencia sexual sigue teniendo un papel importante en la economía política de la guerra. Las mujeres y las niñas son objeto de trata con fines de explotación sexual; son secuestradas, y se amenaza con emplear la violencia sexual contra ellas para obtener mayores rescates. Lo vemos en Haití, donde el comercio ilícito de armas alienta el uso estratégico de la violencia sexual por parte de las bandas. Por ello, los Estados Unidos seguirán colaborando estrechamente con sus asociados en las Naciones Unidas y en Kenya para establecer sistemas y procesos en el marco de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, orientados, entre otras cosas, a prevenir el contrabando de armas.

Por ello, seguiremos defendiendo la política estadounidense sobre las transferencias de armas convencionales, que obliga a nuestros organismos gubernamentales a evaluar si las transferencias estadounidenses de armas podrían utilizarse para cometer, facilitar o aumentar el riesgo de violencia de género. Por esta misma razón, seguiremos trabajando con los comités de sanciones de las Naciones Unidas para que se incluya en las listas a los responsables de abusos contra los derechos humanos, en particular actos de violencia sexual relacionada con los conflictos.

Como tercera y última observación, quiero decir que, en todo este trabajo, debemos velar por que nuestro enfoque —desde la mitigación hasta la documentación, desde la vigilancia hasta la actuación judicial— se centre en las personas supervivientes, se base en el consentimiento y se vincule a los servicios de respuesta a la violencia de género. El informe que nos ocupa evidencia la importancia de este enfoque, ya que hace hincapié en los Gobiernos que abordan activamente la violencia sexual relacionada con los conflictos y empoderan a las mujeres para que asuman un papel de liderazgo. Lugares como Colombia, Bosnia-Herzegovina, el Iraq y la República Centroafricana están demostrando al mundo cómo centrarse en las supervivientes puede ayudar a las comunidades a superar sus traumas. Por su parte, los Estados Unidos están apoyando a otros a fin de que

hagan lo mismo: desde ayudar a las instituciones ucranianas a dotar a las sobrevivientes de apoyo psicosocial, servicios de reintegración y asistencia jurídica centrada en ellas, hasta financiar servicios de asesoramiento que ayuden a empoderar a las sobrevivientes y las cuidadoras en Sudán del Sur, pasando por la colaboración con organizaciones no gubernamentales locales en la India a fin de hacer un inventario de las necesidades de asistencia jurídica y social que tienen las mujeres vulnerables que están en riesgo de ser víctimas de la violencia de género, lo que incluye ayudar a las mujeres rohinyás, que corren un mayor riesgo de sufrir ese tipo de violencia, a escapar de relaciones abusivas, acceder a servicios para sobrevivientes y obtener protección de la policía local.

A pesar de que han pasado diez años desde aquel terrible día en Nigeria, aún queda mucho por hacer a fin de garantizar que los agentes no estatales que aterrorizan impunemente a mujeres y niñas rindan cuentas y que las fuerzas estatales no cometan actos de violencia sexual. Por tanto, trabajemos por hacer justicia a las supervivientes y démosles el apoyo que necesitan para superar sus traumas y los de sus comunidades. Centremos nuestros esfuerzos en los supervivientes, tanto aquí en las Naciones Unidas como en cada uno de los Estados Miembros. Esforcémonos por combatir las causas de la violencia sexual relacionada con los conflictos, incluida la transferencia de armas pequeñas y armas ligeras. Pongamos fin a la cultura de la impunidad que ha permitido durante demasiado tiempo la prevalencia de la violencia de género.

Sr. Afonso (Mozambique) (*habla en inglés*): La representación de Mozambique felicita a la Presidencia maltesa del Consejo por haber organizado este importante debate abierto. También desea expresar su profundo agradecimiento por sus exhaustivas y esclarecedoras exposiciones informativas a la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Sra. Pramila Patten; a la Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Mujeres, Sra. Danai Gurira, y a la fundadora y Presidenta de Darfur Women Action Group, Sra. Niemat Ahmadi.

La violencia sexual relacionada con los conflictos es una violación grave y corrosiva de los derechos humanos. Esa violencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Como se señala en el último informe del Secretario General (S/2024/292), lamentablemente, en el último año la frecuencia con que ocurren esos delitos atroces en el contexto del estallido y la escalada de los conflictos, ha aumentado. Esos conflictos están teniendo consecuencias devastadoras en

las vidas de las personas, las comunidades y las sociedades en general. Mozambique condena enérgicamente el uso de la violencia sexual, cuyos autores deben rendir cuentas. Somos conscientes de que la violencia sexual relacionada con los conflictos se ve alimentada por diversos factores, entre los que se incluye la proliferación de las armas y el aumento de la militarización. Esa desafortunada realidad nos obliga a reflexionar sobre las perspectivas de género y sobre la importancia que tiene el control de armamentos para las mujeres vulnerables, así como a considerar el papel que cumple la dinámica de género en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las iniciativas y políticas relativas a ese control.

Nuestra experiencia en Mozambique demuestra que la participación de las mujeres en el desarme, la desmovilización y la reintegración puede ayudar a garantizar que se haga justicia a las víctimas de la violencia sexual relacionada con los conflictos y en general puede contribuir al logro de la paz. Además, hemos llegado a la conclusión de que las iniciativas concebidas para hacer frente a la violencia sexual relacionada con los conflictos deben promover la participación de las mujeres en los procesos de paz y la toma de decisiones, atender las causas fundamentales de los conflictos y mejorar la capacidad de los sistemas judiciales para prevenir las situaciones de violencia sexual y responder de manera adecuada. Las iniciativas internacionales y regionales son de importancia fundamental para abordar y evitar la violencia sexual relacionada con los conflictos, así como para garantizar el control de armamentos, pues permiten la actuación coordinada de países de diferentes regiones.

Consideramos que poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos es un aspecto crucial en los esfuerzos por lograr paz y seguridad sostenibles, sobre todo en nuestro continente africano. En este sentido, nos gustaría destacar la encomiable contribución que ha supuesto para el control de armamentos el establecimiento del Mes de la Amnistía en África para la entrega y recogida de armas ilícitas y armas ligeras. La medida, que es parte de la iniciativa Silenciar las Armas, que promueve la Unión Africana y está en marcha desde 2017, ha contribuido a reducir la disponibilidad de armas, haciéndolas menos asequibles para quienes generan violencia sexual en los entornos de conflicto. África cuenta con un marco que busca prevenir la proliferación de las armas pequeñas y las armas ligeras, así como la violencia sexual relacionada con los conflictos. Ese marco incluye la posición común de la Unión Africana respecto de un Tratado sobre el Comercio de

Armas, la campaña de la Unión Africana de 2019 sobre la prevención y respuesta a la violencia sexual relacionada con los conflictos y la red de la Unión Africana de 2018 sobre género y consolidación de la paz. Esas iniciativas buscan concienciar, capacitar y fomentar la coordinación en materia de control de armamentos y la cooperación para prevenir y responder a la violencia sexual relacionada con los conflictos y para promover la paz y la seguridad sostenibles en nuestro continente.

En ese contexto de nuestro propio proceso nacional de desarme, desmovilización y reintegración, Mozambique ha realizado enormes esfuerzos para prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos. Además, nuestro plan de acción nacional sobre las mujeres y la paz y la seguridad incluye un componente para prevenir y enfrentar con eficacia ese tipo de violencia. Aunque se han registrado avances, aún queda mucho por hacer para erradicar las causas profundas de la violencia sexual relacionada con los conflictos, garantizar un apoyo sostenido a las sobrevivientes y promover la igualdad de género. En ese sentido, Mozambique reitera que está firmemente decidido a seguir contribuyendo a nuestra acción colectiva para hacer frente a la violencia sexual relacionada con los conflictos, incluso en el ámbito del control de armamentos.

Consideramos que las mujeres y las niñas pueden desempeñar un papel transformador en los procesos políticos, socioeconómicos y de paz, que debemos aprovechar en aras de la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales.

Dame Barbara Woodward (Reino Unido) (*habla en inglés*): Me gustaría dar las gracias a la Representante Especial Patten y a las Sras. Ahmadi y Gurira por informarnos hoy, y, en particular, quisiera dar las gracias a la Representante Especial Patten por su determinación de hablar en nombre de las víctimas y los supervivientes y por defender y cumplir su mandato.

La violencia sexual relacionada con los conflictos no es una consecuencia inevitable de la guerra. El Reino Unido mantiene su determinación de hacer frente a ese tipo de violencia. De hecho, hemos dado prioridad a esta agenda, a través del liderazgo de nuestro Representante Especial del Primer Ministro, y hemos contribuido mediante iniciativas clave, como la publicación del Código Murad.

Quisiera destacar tres prioridades.

En primer lugar, en cuanto al tema central del debate de hoy, el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme estima que entre el 70 % y el

90 % de los incidentes de violencia sexual relacionados con conflictos se usan armas de fuego o de otro tipo. En contextos en los que las armas pequeñas y de otro tipo están contribuyendo a niveles de violencia sexual relacionada con los conflictos tan elevados, un control eficaz de las armas convencionales puede desempeñar un papel vital en la prevención, y las mujeres deben hallarse en el centro de esos esfuerzos. En nuestro propio plan de acción nacional sobre las mujeres y la paz y la seguridad se destaca la importancia del control de armamentos. Abogamos por la aplicación de medidas nacionales de control de armas, incluido el control efectivo de las exportaciones, para reforzar la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos. Una reforma del sector de la seguridad en la que se tengan en cuenta las cuestiones de género contribuirá a garantizar que quienes portan armas no las utilicen para perpetrar actos de violencia sexual relacionada con los conflictos. El hecho de que la violencia sexual relacionada con los conflictos esté tan extendida, como se muestra en el informe anual del Secretario General (S/2024/292), es realmente estremecedor. El Consejo de Seguridad tiene un papel esencial que desempeñar en la configuración de la respuesta internacional a ese tipo de violencia. Debemos utilizar las herramientas de que dispone el Consejo para disuadir de la comisión de actos futuros de violencia sexual relacionados con los conflictos, entre otras cosas mediante la imposición de sanciones, cuando proceda.

En segundo lugar, hay tres contextos sobre los cuales me gustaría llamar especialmente la atención. En primer lugar, en el Sudán —como nos ha explicado con tanta claridad la Sra. Ahmadi en su exposición informativa—, en los informes sobre violencia sexual relacionada con los conflictos se pinta un panorama desolador, y el Reino Unido está apoyando a sus asociados para que atiendan y protejan a los supervivientes. Nos hacemos eco del llamamiento del Secretario General en favor del cese de la violencia, del establecimiento de un alto el fuego inmediato y sostenible y de corredores humanitarios para que los supervivientes puedan acceder a la ayuda. El segundo contexto es Ucrania. Existen pruebas —y se van acumulando— de que las fuerzas rusas están ejerciendo violencia sexual relacionada con el conflicto contra civiles y prisioneros de guerra ucranianos. Dos agresores rusos han sido condenados por violencia sexual relacionada con el conflicto. Esos actos parecen seguir una pauta del uso de la violencia sexual relacionada con los conflictos como arma de guerra, y el equipo de expertos de la iniciativa del Reino Unido para la

prevención de la violencia sexual en los conflictos está ayudando a crear capacidad de investigación para promover la rendición de cuentas en Ucrania. En cuanto al tercer contexto, en Israel y los territorios palestinos ocupados, condenamos todas las denuncias e informes de violencia sexual relacionada con el conflicto. Abogamos por que se realicen investigaciones exhaustivas y se adopte un enfoque centrado en los supervivientes, que se libere inmediatamente a los rehenes y que se trate a los detenidos con dignidad y de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

Por último, en un mundo en el que, como nos ha señalado la Sra. Gurira, basta con pagar 80 céntimos para destrozar la vida de una niña, el Reino Unido sigue impulsando medidas para reforzar la respuesta mundial a la violencia sexual relacionada con los conflictos, y ha establecido el año pasado la Alianza Internacional para la Prevención de la Violencia Sexual en los Conflictos. Se han adherido a ella 26 miembros, entre ellos Gobiernos, organizaciones multilaterales, supervivientes, organizaciones de la sociedad civil y el Fiscal de la Corte Penal Internacional, y seguimos acogiendo a nuevos miembros. A través de la Alianza, estamos impulsando una mayor coordinación internacional para abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos y prestar apoyo a las personas supervivientes.

Por tanto, pedimos a los miembros del Consejo que apliquen las recomendaciones del informe, que pongan de su parte para poner fin a estos actos abominables y que acaben de una vez por todas con la impunidad.

Sra. Broadhurst Estival (Francia) (*habla en francés*): En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Presidencia maltesa por la celebración de este debate público, así como a las exponentes por sus conmovedoras presentaciones y testimonios.

Quisiera reiterar el pleno apoyo de Francia al mandato de la Representante Especial del Secretario General y de su Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos, que este año celebra su 15º aniversario. Como se indica en el informe anual del Secretario General (S/2024/292), la violencia sexual va en aumento, y afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas en el Sudán, que atraviesa por una de las crisis humanitarias más graves del mundo, en Sudán del Sur, en Haití, en la República Centroafricana, en la República Democrática del Congo y en muchas otras situaciones de conflicto. Francia toma nota de la inclusión, en el informe anual, de una sección dedicada a Gaza y la Ribera Occidental y reitera su más enérgica

condena de los atentados terroristas y de la violencia sexual perpetrados por Hamás y otros grupos terroristas el 7 de octubre de 2023. Condenamos de la forma más rotunda el uso de la violación como arma de guerra, con independencia de dónde se perpetre. Tomamos nota de que, al igual que el informe del año pasado, en el informe anual se hace referencia al uso reiterado por parte de las fuerzas rusas de la violencia sexual, incluida la violación, en la guerra librada contra Ucrania.

El debate público de hoy se centra en el tráfico y la difusión de armas pequeñas y armas ligeras, que se emplean en la inmensa mayoría de los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos. Exhortamos a los Estados a que cumplan estrictamente sus obligaciones internacionales a ese respecto, en particular la obligación que les impone el Tratado sobre el Comercio de Armas de tener en cuenta, al evaluar las solicitudes de exportación, el riesgo de que las armas puedan emplearse para cometer actos graves de violencia de género o para facilitar la comisión de tales actos de violencia. Abogamos por la plena aplicación de las resoluciones 2616 (2021) y 2220 (2015) relativas al registro y trazabilidad de armas pequeñas y armas ligeras y a los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. La cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para Examinar los Progresos Alcanzados en la Ejecución del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos, que se celebrará el próximo mes de junio, constituye un hito importante a ese respecto.

El Consejo debe seguir adoptando medidas concretas para aplicar la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad en todas sus dimensiones. Queremos dar las gracias a ONU-Mujeres, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, al Departamento de Operaciones de Paz y al Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz por todas las medidas que han adoptado.

Debemos actuar, en primer lugar, luchando contra la impunidad, tal como pidió la Sra. Gurira con tanta vehemencia. Debemos apoyar a las autoridades nacionales para garantizar que la legislación castiga los delitos sexuales y que las víctimas tienen acceso a la justicia. A ese respecto, acogemos con satisfacción la labor esencial que acomete el Equipo de Expertos de la Representante Especial, que recientemente organizó la primera Conferencia Internacional de Fiscales sobre el tema, copatrocinada por Francia. También celebramos los esfuerzos que despliega la Corte Penal Internacional para investigar este tipo de violencia.

Debemos actuar apoyando a las víctimas supervivientes y garantizando su acceso a los servicios sanitarios esenciales, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Recuerdo que, en el marco de su tercer plan de acción nacional 2021-2025 relativo a la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, Francia financió con 14 millones de euros el Fondo Mundial para Supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos. También debemos abordar colectivamente la cuestión de los niños nacidos de violaciones relacionadas con conflictos.

Por último, es importante tomar medidas para adoptar sanciones contra los autores de actos de violencia sexual relacionada con conflictos. En particular, estamos a favor de reforzar los conocimientos especializados de los Grupos de Expertos de los Comités de Sanciones a este respecto y de tener más en cuenta la labor de los Comités y los Grupos que figuran en el anexo del informe anual del Secretario General. Debemos considerar la posibilidad de incluir un criterio de designación relativo a la violencia sexual en los regímenes de sanciones que aún no lo incluyan, siempre que sea pertinente.

Sra. Persaud (Guyana) (*habla en inglés*): Doy las gracias a la Representante Especial del Secretario General, Pramila Patten, a la Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Mujeres, Danai Gurira, y a la Sra. Niemat Ahmadi por sus exposiciones informativas.

El reciente informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos (S/2024/292) ha vuelto a poner de relieve el hecho de que el flujo ilícito y la disponibilidad generalizada de armas pequeñas y armas ligeras y su munición está facilitando directamente los incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos y fomentando un entorno que favorece su perpetración. La violencia sexual relacionada con los conflictos sigue siendo utilizada por agentes estatales y no estatales como táctica de guerra, instrumento de tortura y medio de afirmar el poder y la dominación, lo cual tiene consecuencias devastadoras para las víctimas, los supervivientes y sus familias y comunidades.

Aunque las mujeres y las niñas constituyen la gran mayoría de las personas afectadas por la violencia sexual relacionada con los conflictos, siguen quedando excluidas de la toma de decisiones clave en materia de paz y seguridad. Guyana subraya la importancia de la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres, incluso en la toma de decisiones, a todos los niveles de los procesos políticos y de consolidación de la paz y en los esfuerzos de desarme, no proliferación y

control de armamentos. El Consejo de Seguridad y las organizaciones regionales deben intensificar sus esfuerzos para crear sinergias entre los marcos de desarme y los mecanismos e instrumentos de las Naciones Unidas, en particular en el período previo a la Cuarta Conferencia de Examen del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos. La integración de la perspectiva de género en los debates sobre el desarme puede reforzar de manera considerable la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos, y garantizar que las soluciones sean integrales y eficaces.

El Consejo de Seguridad debería aprovechar todas las herramientas de que dispone para abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos. Las autorizaciones y las renovaciones de sus mandatos de operaciones de paz deben incluir disposiciones operacionales, así como medidas de control de armamentos y desarme destinadas a prevenir la violencia sexual y responder a ella. Incluso cuando se acelera la retirada de una operación de paz, es esencial mantener los mecanismos de vigilancia, análisis y presentación de informes, así como la interacción con las partes sobre la violencia sexual relacionada con el conflicto. En este sentido, reconocemos la contribución fundamental de los asesores de protección de las mujeres. También hacemos hincapié en que es indispensable mantener las inversiones en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, así como en la reforma del sector de la seguridad durante las transiciones y las retiradas de las misiones. Es crucial mantener esas inversiones para proteger a los civiles de la violencia sexual relacionada con los conflictos y evitar que se repita. El apoyo permanente y la creación de capacidades para las instituciones nacionales y locales son factores esenciales para garantizar que los logros no sean efímeros y se establezcan cimientos firmes para el desarrollo, la igualdad y la rendición de cuentas, factores fundamentales para prevenir y disuadir la violencia sexual.

Una cooperación internacional sólida y la adhesión al Tratado sobre el Comercio de Armas son elementos cruciales para mitigar los riesgos de violencia sexual relacionada con los conflictos, que plantean las transferencias de armas y la proliferación de armas ilícitas. Los Estados partes en el Tratado deben cumplir con la obligación que les impone de evaluar de manera exhaustivamente el riesgo de que las armas puedan utilizarse para cometer o facilitar actos graves de violencia de género, y de hacerlo antes de autorizar la exportación de esas armas. Una evaluación eficaz de los riesgos en el

marco del Tratado exigirá una recogida y desglose sistemáticos de datos.

También es crucial combatir la impunidad, que envalentona a los autores, y promover la rendición de cuentas. Los delitos que entrañan violencia sexual deben quedar excluidos de las disposiciones en materia de amnistía e inmunidad. El Consejo debe seguir insistiendo en que las partes estatales y no estatales en los conflictos asuman compromisos con plazos determinados para prevenir y abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos, y en que se vigile el cumplimiento de esos compromisos. Asimismo, es preciso reforzar los vínculos entre las partes que figuran en los informes anuales del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos y las designaciones de sanciones. Guyana considera que la violencia sexual y de género debe ser un criterio de designación independiente para aplicar sanciones a los autores reincidentes.

Para concluir, Guyana reafirma su adhesión a la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad y a la eliminación de la violencia sexual relacionada con los conflictos mediante una desmilitarización concertada y medidas de control de armamentos, que tengan en cuenta las cuestiones de género. Solo mediante la acción colectiva, la inversión sostenida y el fomento de la igualdad de género, así como garantizando la justicia y el apoyo a las personas supervivientes, junto con la integración plena de las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones, podremos erradicar el flagelo de la violencia sexual relacionada con los conflictos.

Sr. De La Gasca (Ecuador): Agradezco la información proporcionada por la Representante Especial Pramila Patten, por la Embajadora de Buena Voluntad, Danaï Gurira, y por la representante de la sociedad civil, Niemat Ahmadi.

El Ecuador toma nota del contenido del Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos correspondiente al año 2023 (S/2024/292), y lamenta que la escalada global de la violencia asociada a los conflictos armados continúe minando las condiciones de seguridad y dignidad de la población civil, en especial de mujeres, niñas y personas con diversas identidades de género. El informe documenta casos verificados en el uso de violencia sexual como táctica de guerra, matrimonios forzados, embarazos no deseados y establece una correspondencia entre la persistencia en el cometimiento de estos delitos y la exacerbación de los conflictos armados. Reconoce, además, que las mujeres desplazadas, refugiadas y

migrantes constituyen uno de los grupos más vulnerables y en mayor riesgo de ser víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual. Asimismo, registra una tendencia creciente en el número de mujeres que se enfrentan a ataques de violencia política basada en el género, desinformación y difusión de discursos de odio, acoso en línea y fuera de ella, como estrategias para desacreditarlas en el ámbito político, amedrentar a las defensoras de derechos humanos, y restringir sus posibilidades de participación en la esfera política.

Uno de los elementos más discutidos durante el debate abierto sobre armas pequeñas y armas ligeras organizado por el Ecuador en diciembre de 2023 (véase S/PV.9509), fue que la mayoría de los incidentes violentos relacionados con estas armas son perpetrados por hombres y que su mal uso multiplica los episodios de violencia sexual en las situaciones de conflicto y la impunidad. Por tanto, es imprescindible que una mayor cantidad de mujeres participe en los procesos de paz y en la toma de decisiones sobre el control de armamentos. Por otro lado, contar con información verificada por las Naciones Unidas sobre el número de casos de violencia sexual en las situaciones de conflicto, así como el listado de posibles perpetradores, es relevante en los esfuerzos por frenar esta práctica execrable y el factor determinante para erradicar la impunidad a través del establecimiento de sistemas transparentes de rendición de cuentas y justicia reparativa centrados en las víctimas, en consonancia con lo previsto en la resolución 2467 (2019).

Mi delegación considera que es fundamental promover el trabajo articulado entre Naciones Unidas, organismos regionales e instituciones nacionales para garantizar que los equipos sobre el terreno accedan a condiciones de seguridad y libertad de movimiento en las zonas más complejas, de manera que puedan continuar levantando estadísticas que otorguen voz a las víctimas y orienten la toma de decisiones de este Consejo y de la comunidad internacional. En esta línea, permítaseme reconocer los resultados del trabajo de la red interinstitucional Acción de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos, que dan cuenta de la efectividad de gestionar de manera coordinada el financiamiento para la construcción de capacidades institucionales y para la implementación de programas y proyectos orientados a la prevención de la violencia sexual en la esfera local, pero con una perspectiva regional y global.

El Ecuador considera esencial fortalecer las acciones encaminadas al diseño de marcos preventivos de

violencia sexual relacionada con los conflictos; gestionar las raíces profundas de dichos conflictos; utilizar las herramientas políticas y diplomáticas para alcanzar acuerdos definitivos de alto el fuego, y procurar el empoderamiento de las víctimas y su participación plena y segura en los procesos de construcción y consolidación de la paz, de conformidad con las disposiciones de la resolución 1325 (2000) y otras relacionadas.

Concluyo mi intervención resaltando el compromiso del Grupo Oficioso de Expertos del Consejo de Seguridad sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad. El trabajo sistemático que viene desarrollando bajo el liderazgo de Suiza y Sierra Leona, que cuenta con el apoyo, además, de ONU-Mujeres, debe continuar con el fin de viabilizar los retos específicos en cada uno de los escenarios en conflicto, motivar la inclusión de los perpetradores en los listados de sanciones y velar por que los productos del Consejo incluyan disposiciones claras sobre el tratamiento de la violencia sexual relacionada con los conflictos.

Sr. Žbogar (Eslovenia) (*habla en inglés*): La violencia sexual y de género, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos, está en alza en todo el mundo. Se sigue utilizando como táctica de guerra. Eso no solo constituye una grave violación del derecho internacional y puede equivaler a un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, sino que también es uno de los crímenes más aborrecibles y hay que ponerle fin.

Acogemos con agrado que este año el debate abierto se centre en la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos a través de la desmilitarización y un control de armamentos que tenga en cuenta las cuestiones de género. Sentimos consternación por las conclusiones del reciente informe del Secretario General (S/2024/292) que acaba de presentar la Representante Especial Patten. Y agradecemos a la Sra. Ahmadi y a la Sra. Gurira sus observaciones y su entrega.

La disponibilidad de armas, en particular de armas pequeñas y armas ligeras y sus municiones, tiene una incidencia significativa en la vida de las mujeres y las niñas. Ya se ha mencionado hoy, pero permítaseme repetir que entre el 70 y el 90% de los incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos implica el uso de armas pequeñas y armas ligeras. Su transferencia ilícita, su uso indebido y, en particular, la facilidad con que se obtienen, siguen alimentando los conflictos armados, la violencia, los actos delictivos y el terrorismo. Lo vemos en diversas situaciones que figuran en la agenda del Consejo, en particular en la República

Democrática del Congo, Myanmar, el Sudán y Haití. Condenamos con firmeza todos los actos de violencia sexual en todos los ámbitos, incluidos Israel y Palestina, y pedimos que se investiguen.

Para abordar eso, debemos redoblar nuestros esfuerzos conjuntos. Permítaseme formular las siguientes observaciones.

Los Estados deben fortalecer las autoridades nacionales, la legislación, la normativa y los procedimientos administrativos en materia de control y transferencias de armas pequeñas y armas ligeras y sus municiones. Eso es necesario para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, incluidos el Tratado sobre el Comercio de Armas, el Protocolo de las Naciones Unidas sobre Armas de Fuego, el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos, y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Hay que desplegar esfuerzos específicos para evitar el desvío de armas pequeñas y armas ligeras y sus municiones a zonas de conflicto y posconflicto, donde la violencia sexual relacionada con los conflictos está especialmente extendida.

En segundo lugar, no debemos trabajar de forma aislada. La agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad es muy importante cuando se aborda la cuestión de la proliferación de armas. Una forma de integrarlas es incorporar las disposiciones de los artículos pertinentes del Tratado sobre el Comercio de Armas y otros documentos pertinentes en los planes de acción nacionales sobre las mujeres y la paz y la seguridad, y adoptar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género en las políticas nacionales de control de armamentos.

En tercer lugar, las mujeres siguen estando muy poco representadas en los debates internacionales sobre control de armamentos y desarme. Sin embargo, sus perspectivas son esenciales para formular políticas y estrategias que tengan en cuenta las cuestiones de género y para prevenir el uso indebido de las armas para todas las formas de violencia sexual y de género, en particular en el contexto de los conflictos. Por lo tanto, pedimos la participación plena, igualitaria, significativa y segura de las mujeres en todos los procesos y la toma de decisiones relacionados con el control de armas y el desarme.

Eslovenia condena con firmeza todos los actos de violencia sexual de género. Exhortamos a todas las partes en conflicto a que pongan fin de inmediato a todas las formas de violencia sexual relacionada con los conflictos. La respuesta a este tipo de violencia debe

basarse en los derechos y centrarse en las personas supervivientes. Debe incluir el acceso y la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, así como apoyo psicosocial para las personas supervivientes.

Nos sentimos consternados por el hecho de que la impunidad siga siendo la norma, lo que contribuye a crear un entorno propicio para la perpetración de la violencia sexual. Instamos a todos los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por estos delitos. Eso puede hacerse mediante el despliegue del Equipo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos y de asesores de protección de las mujeres para prestar ayuda a los sistemas nacionales de justicia en las sociedades afectadas por conflictos. También es importante que las supervivientes tengan acceso a la justicia en un entorno seguro, donde puedan denunciar la violencia, sentirse seguras y recibir el apoyo jurídico adecuado.

El Consejo de Seguridad debe hacer más para abordar de forma integral la violencia sexual y de género. Una de esas vías es una integración más sistemática del género en los regímenes de sanciones, incluidas la violencia sexual y de género como criterio de designación para las sanciones selectivas en todos los regímenes pertinentes. Asimismo, reiteramos nuestro llamamiento a todos los Estados y agentes para que cumplan los embargos de armas vigentes establecidos por el Consejo con el fin de limitar la disponibilidad y accesibilidad de las armas.

Las mujeres y las niñas son mucho más que víctimas o supervivientes de esa violencia. Son agentes que se dedican a la consolidación de la paz y agentes de respuesta de primera línea, y desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios muy necesarios a mujeres y niñas en situaciones de conflicto o posconflicto. Por lo tanto, apoyamos con firmeza las voces de las mujeres sobre el terreno. Pedimos que se celebren consultas con las mujeres y las organizaciones dirigidas por mujeres y condenamos cualquier intento de intimidarlas y silenciarlas.

El Presidente (*habla en inglés*): El representante de los Estados Unidos ha pedido la palabra para formular una nueva declaración.

Sr. Kelley (Estados Unidos de América) (*habla en inglés*): La Embajadora Thomas-Greenfield me acaba de pedir que dé las gracias específicamente a nuestra exponente de la sociedad civil, Sra. Ahmadi, por la labor importantísima que lleva a cabo en el Sudán.

El Presidente (*habla en inglés*): La representante de la Federación de Rusia ha pedido la palabra para formular una nueva declaración.

Sra. Zabolotskaya (Federación de Rusia) (*habla en ruso*): Parecería que nuestro debate de hoy ha sido muy útil para ayudarnos a determinar con exactitud cuál es el método que, lamentablemente, se está utilizando en las Naciones Unidas para politizar este importante tema y presentarlo de manera distorsionada.

A lo largo del debate, oímos a los Estados Unidos y al Reino Unido admitir, por ejemplo, que están llevando a cabo algún tipo de investigación sobre delitos sexuales cometidos en el territorio de Ucrania. Huelga decir que todo el mundo sabe que los Estados Unidos y el Reino Unido no algún tipo de organización neutral. Tienen sus propios intereses políticos en Ucrania. Por lo tanto, es obvio qué tipo de resultados van a obtener cuando lleven a cabo esas investigaciones. No les interesan los crímenes cometidos por Ucrania y las fuerzas armadas ucranianas.

La información que recopilan se remite posteriormente a la denominada misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania. Esa misión de vigilancia está completamente bajo el control de Kiev. La jefa de la misión simplemente tiene miedo de decir algo que no sea del agrado de Kiev. A continuación, esos datos se incluyen en el informe redactado por la Sra. Pramila Patten y ese es el cuadro que vemos. Por ejemplo, el acceso a Gaza es restringido y, por alguna razón, algunos países no están interesados en ir a Gaza para constatar por sí mismos cuál es la situación en relación con los diversos tipos de crímenes, incluidos los sexuales. Por lo tanto, el informe es un espejo que distorsiona. No nos ayuda en modo alguno a luchar contra los delitos sexuales, a pesar de que se trata de una batalla importante y realmente es necesario librarla. Pero no de ese modo.

El Presidente (*habla en inglés*): Deseo recordar a todas las delegaciones que deben limitar sus declaraciones a un máximo de cuatro minutos para que el Consejo pueda llevar a cabo su labor de forma diligente. Transcurridos cuatro minutos, la luz de los micrófonos parpadeará para indicar que se debe concluir la intervención.

Tiene la palabra el representante de Portugal.

Sr. Sampaio (Portugal) (*habla en inglés*): Portugal da las gracias a Malta por haber convocado este debate tan importante y oportuno. Damos también las gracias a las exponentes por sus presentaciones y a la Representante Especial por todo su trabajo. Valoramos en

grado sumo las ideas y los testimonios que hemos escuchado hoy en las intervenciones de la Sra. Ahmadi y la Sra. Gurira.

Como se señala en el último informe del Secretario General (S/2024/292), el aumento de las tensiones geopolíticas y la escalada de conflictos armados han expuesto a los civiles a un mayor nivel de violencia sexual relacionada con el conflicto. La violencia sigue afectando de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, cuyas voces siguen siendo silenciadas o están ausentes en los principales foros donde se adoptan decisiones sobre cuestiones de paz y seguridad.

Portugal condena rotundamente el uso de la violencia sexual por parte de agentes estatales y no estatales como táctica de guerra, tortura y terrorismo en los contextos de conflicto armado. Nos oponemos a todas las formas de violencia contra las mujeres.

La proliferación de armas y su tráfico ilícito en manos de grupos armados, grupos de delincuencia organizada y grupos terroristas exacerban la violencia, la opresión y los abusos, sobre todo contra las mujeres y contra los integrantes de colectivos vulnerables. A la hora de responder a la violencia sexual relacionada con los conflictos, se necesita un enfoque centrado en los supervivientes, lo que implica garantizar el acceso a asistencia médica, psicosocial y jurídica.

Ahora bien, lo primero y más importante es prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos. Ello requiere un enfoque multidimensional, que debe incluir medidas de desmilitarización, un control de armamento que tenga en cuenta las cuestiones de género, y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Además, el imperativo de prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos debería formar parte de la nueva generación de estrategias nacionales de prevención de los conflictos, tal como sugiere el Secretario General en su oportuna Nueva Agenda de Paz.

Al acercarse el 25º aniversario de la aprobación de la resolución 1325 (2000), recordamos la importancia que supuso el hecho de que se pusiera énfasis en la repercusión de los conflictos armados para las mujeres y se subrayara la importancia crucial de la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en la prevención, la gestión y la solución de los conflictos.

En el seno de las Naciones Unidas, debemos profundizar y reforzar la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, incorporando indicadores, análisis y medidas sensibles al género en las políticas de desarme, garantizando la

participación de las mujeres en las iniciativas de consolidación de la paz y apoyando el liderazgo de las mujeres en la sociedad civil y en las organizaciones de base.

A nivel nacional, Portugal ha aprobado un plan de acción nacional sobre las mujeres y la paz y la seguridad, cuya cuarta edición está en preparación, y ha incorporado la perspectiva de género en las fuerzas armadas portuguesas.

Para concluir, reafirmamos nuestra firme determinación de promover la seguridad, la paz sostenible y la igualdad de género, previniendo así la aparición de conflictos y garantizando que todas las mujeres y las niñas disfruten plenamente y en igualdad de condiciones de los derechos humanos.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el representante de Egipto.

Sr. Mahmoud (Egipto) (*habla en inglés*) quiero dar las gracias a Malta por haber organizado esta importante sesión. Apreciamos que el debate se centre en el componente de la prevención y que se haga especial hincapié en el control de armamentos, la desmilitarización y el desarme. Doy las gracias también a las exponentes por sus valiosas aportaciones.

Mi delegación considera sumamente alarmantes las conclusiones del informe del Secretario General (S/2024/292), que apuntan al uso persistente de la violencia sexual como táctica de guerra, amplificado por la proliferación de conflictos en diversas regiones.

La agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, en particular los aspectos relacionados con la violencia sexual en los conflictos armados, no se limita a los debates sobre la participación de las mujeres en todo el continuo de la paz y sobre el empoderamiento de la sociedad civil. Se trata de hacer oír las voces de las mujeres y de las víctimas de la violencia y de diversas formas de atrocidades, así como de lograr justicia, estableciendo y garantizando la rendición de cuentas y poniendo fin a la impunidad por esa violencia y esas atrocidades. Los esfuerzos en ese sentido deberían abordar de manera integral las causas profundas de los conflictos y centrarse en la prevención, teniendo plenamente en cuenta los aspectos sociales, económicos, políticos y de desarrollo.

A pesar de los años de dedicación del sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y otras partes interesadas a la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, la comunidad internacional es aún incapaz de prevenir o detener los conflictos o de evitar la violencia contra las mujeres y las niñas en las situaciones de

conflicto armado. Tampoco es capaz de defender los derechos de las mujeres en esos contextos, en particular de las mujeres y niñas bajo ocupación extranjera. Son un ejemplo las mujeres palestinas, que actualmente están expuestas de manera desproporcionada a la violencia, y de hecho a la aniquilación, en la actual guerra de agresión genocida emprendida por Israel, la Potencia ocupante, contra Gaza. Ello se suma a las atrocidades y las violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres palestinas que se vienen cometiendo desde hace largo tiempo en el territorio palestino ocupado, en particular en la Ribera Occidental.

En ese sentido, mi delegación aprecia la incorporación de una nueva sección sobre Israel y el territorio palestino ocupado. Hace mucho que se debería haber añadido, ya que la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, ha cerrado los ojos durante años ante las denuncias de presuntos actos de violencia, en particular violencia sexual, y otras infracciones cometidas por Israel, la Potencia ocupante, contra los palestinos.

Tomamos nota de la visita oficial realizada por la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Sra. Pramila Patten. En relación con los atentados del 7 de octubre, cito las palabras del informe:

“[c]omo no tenía fines de investigación y su duración era limitada, la misión no extrajo conclusiones que permitieran imputar los hechos a grupos armados específicos o determinar el total de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto que se habían producido durante los atentados del 7 de octubre y posteriormente, para lo que debía hacerse una investigación en toda regla”.

Tal investigación es difícil de llevar a cabo mientras la guerra continúe, mientras los civiles sean bombardeados y mientras los actores humanitarios sean objeto de los ataques que Israel, lamentablemente, comete con impunidad.

En cuanto a la situación en la Ribera Occidental, mi delegación se hace eco del llamamiento del Secretario General al Gobierno de Israel para que sin más demora autorice el acceso de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas para que investiguen exhaustivamente todas las presuntas violaciones, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, con miras a garantizar que haya justicia y rendición de cuentas.

Egipto sigue decidido a colaborar con los esfuerzos encaminados a poner fin a la actual guerra de agresión contra la Franja de Gaza y hace un llamado a favor de

un alto el fuego inmediato, de un acceso humanitario sin obstáculos, del fin de la difícil situación de los palestinos, de la rendición de cuentas de Israel como autor de los ataques y del establecimiento de un Estado independiente de Palestina que tenga como fronteras las del 4 de junio de 1967 y como capital a Jerusalén Oriental.

Mi delegación está igualmente alarmada por los informes sobre las atrocidades que se cometen en el Sudán, incluida la violencia sexual, como resultado de la guerra que asola al país. En particular nos preocupan los informes de las Naciones Unidas que contienen pruebas de la violencia sexual que, como también hemos escuchado hoy, tiene lugar en la región de Darfur. Egipto condena esas atrocidades e insta a establecer de inmediato un alto el fuego; a facilitar el acceso humanitario; a respetar la soberanía, la unidad y la integridad territorial del Sudán; a preservar las instituciones del Estado; a respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos; a lograr que los agentes externos se abstengan de intervenir en los asuntos del Sudán, en particular de transferir armas que aviven aún más el conflicto a las Fuerzas de Apoyo Rápido o a cualquier otro grupo armado, y a retomar un proceso político que esté dirigido y protagonizado por los sudaneses. Egipto sigue decidido a alcanzar esos fines mediante una colaboración, cooperación y coordinación constantes con las Naciones Unidas y los Estados vecinos, así como con otros agentes de la región.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra la representante del Yemen.

Sra. Al-mashehari (Yemen) (*habla en árabe*): Para comenzar, Señor Presidente, permítame darle las gracias por convocar esta importante sesión. Deseo también dar las gracias a las exponentes.

La violencia sexual es una violación grave de los derechos humanos. Ese tipo de violencia se ha venido utilizando en situaciones de conflicto y es uno de los peores crímenes que amenazan a las sociedades. La violencia sexual no solo afecta las libertades públicas, sino también repercute en la cohesión, la seguridad, la estabilidad y la vida económica y política de las sociedades, además de tener consecuencias directas para las familias.

Desde que asumió sus funciones, el Consejo Presidencial de Liderazgo ha tomado importantes decisiones para impulsar la participación significativa de las mujeres yemeníes. Ocho mujeres fueron designadas para proporcionar asistencia técnica y conocimientos especializados a los comités del Consejo Presidencial de Liderazgo, a fin de crear condiciones propicias para el

logro de una paz duradera. Por primera vez una mujer fue designada como miembro del Consejo Judicial Supremo. Se nombraron ocho magistradas para el Tribunal Supremo y 271 mujeres como miembros de la judicatura, entre ellas 37 fiscales del Estado.

El Gobierno yemení ha presentado un plan nacional sobre las mujeres y la paz y la seguridad, y trabaja en estrecha coordinación con los organismos gubernamentales pertinentes y las organizaciones de la sociedad civil a fin de proteger a las mujeres en las situaciones del conflicto y posteriores al conflicto y promover su participación en el desarrollo socioeconómico. El Gobierno yemení también concede particular importancia a que la cuestión de la violencia sexual se aborde desde una perspectiva que, además de proporcionar asistencia a las víctimas, busque ampliar la capacidad de los mecanismos de vigilancia, denuncia y reparación. También se está prestando asistencia jurídica en varias provincias a través de la Unión de Mujeres Yemeníes.

Nuestro Gobierno también proporciona todos los recursos necesarios a la comisión nacional encargada de solucionar los problemas y de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos, a la vez que garantiza que la comisión actúe como un mecanismo nacional independiente. El Consejo Presidencial de Liderazgo dio instrucciones al Gobierno para que, además de trabajar en estrecha cooperación con la comisión, facilitara la labor de ese órgano y llevara a la práctica sus recomendaciones, contribuyendo así a la promoción y protección de los derechos humanos.

Las milicias terroristas huzíes siguen violando el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Así se ha hecho notar en informes nacionales y en diversos informes internacionales sobre derechos humanos. El Grupo de Expertos sobre el Yemen y la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos también han mencionado en sus informes que en el Yemen tiene lugar ese tipo de violencia.

Esas milicias terroristas se han aprovechado de la condición de la mujer en la sociedad yemení y han cometido múltiples violaciones contra mujeres y niñas. Las mujeres y las niñas han sido despojadas de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Han sido secuestradas y recluidas en prisiones secretas, violadas y sometidas a torturas físicas y psicológicas, incluso mediante amenazas de manchar su reputación y de chantajear a las familias de las víctimas por su afiliación política o sus actividades sociales y en la sociedad civil.

Muchas mujeres permanecen tras las rejas en cárceles de la milicia, entre ellas Intisar Al-Hammadi y Fatima Al-Arwali, que fueron condenadas penas severas e injustificadas, como la pena de muerte y la privación de libertad.

Las milicias huzíes colocaron millones de minas terrestres en nuestras carreteras y en las inmediaciones de pozos de agua, escuelas, granjas y zonas de pastoreo. Como consecuencia, en varias provincias yemeníes muchos distritos han quedado inhabitables o resultan sumamente peligrosos. Nadie esperaba que se produjera una contaminación aleatoria de tal magnitud y de tales consecuencias para los civiles, en particular para las mujeres y los niños. Según estadísticas de las Naciones Unidas, como promedio, en los últimos cinco años un niño ha resultado herido o muerto cada tres días a causa de restos de guerra o minas terrestres sin explotar. Por tanto, la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad deben condenar esas prácticas brutales que amenazan el tejido social del Yemen y su seguridad y estabilidad. Debe haber tolerancia cero respecto de esta cuestión.

No podemos dejar de mencionar las continuas y horribles violaciones que cometen los ocupantes israelíes contra las mujeres palestinas y sus derechos. Miles de mujeres palestinas se ven afectadas por los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la brutal agresión que se ha desatado contra el pueblo palestino, sobre todo en la Franja de Gaza. Corresponde a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad adoptar medidas cuanto antes para lograr un alto el fuego inmediato y garantizar que esas graves violaciones y abusos de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños lleguen a su fin. Tales violaciones y abusos vulneran flagrantemente el derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Para concluir, permítaseme decir que promover la cooperación internacional a fin de encarar la violencia sexual relacionada con los conflictos es un paso fundamental para lograr un cambio efectivo y duradero en beneficio de las mujeres y las niñas. Debemos intercambiar información y conocimientos con los países que tienen planes nacionales sobre las mujeres y la paz y la seguridad, a los que debemos proporcionar asistencia técnica y financiera. En particular debemos cooperar con los países que padecen conflictos o que se encuentran en situaciones posteriores a conflictos, a fin de que puedan ofrecer protección y respuestas frente a la violencia sexual relacionada con los conflictos.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra la representante de Guatemala.

Sra. Rodríguez Mancía (Guatemala): Guatemala agradece al Gobierno de la República de Malta y a su Vice Primer Ministro por presidir este debate abierto, así como a la Representante Especial, a la Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Mujeres y a la representante de la sociedad civil por sus importantes presentaciones.

Resulta fundamental reconocer que la violencia sexual en conflictos no es simplemente un subproducto inevitable de la guerra, es una táctica de guerra y una violación flagrante del derecho internacional humanitario, la cual debe ser condenada inequívocamente. Al abordar el tema debemos de contemplar una visión holística, la cual reconozca que se debe trabajar en la prevención, la protección a las víctimas y la responsabilidad de los perpetradores. Ello solo puede lograrse involucrando a los Gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y las comunidades afectadas; fortaleciendo las leyes y los mecanismos de rendición de cuentas; garantizando la participación significativa de las mujeres en los procesos de paz, y promoviendo la educación y la sensibilización sobre los derechos humanos y la igualdad de género desde una edad temprana.

Los planes de acción nacionales son un producto vital de la resolución 1325 (2000) de este Consejo para que los Estados implementen sus compromisos acompañados de la sociedad civil, respondiendo a las necesidades y prioridades de los países afectados actualmente por conflictos o de los países en situaciones de postconflicto. La resolución 1820 (2008) exhorta a las partes en los conflictos armados, incluidos los actores no estatales, a proteger a los civiles de la violencia sexual y exhorta a la Comisión de Consolidación de la Paz a analizar el impacto de la violencia sexual vinculada a los conflictos sobre la recuperación temprana y la consolidación de la paz a largo plazo.

Las situaciones de conflicto, con los problemas añadidos de debilidad institucional, impunidad y proliferación de armas, agravan enormemente los riesgos de violencia de género y sexual a nivel global. En la Nueva Agenda de Paz se busca reducir el gasto militar y el impacto que tienen las armas en mujeres, hombres, niños y niñas. En la Agenda para el Desarme se reconoce además que la proliferación, el desvío y el uso indebido de las armas permiten actos terroristas, abusos de derechos humanos y violencia de género. Por lo tanto, las medidas de desmilitarización, desarme y control de armamentos pueden limitar la probabilidad de que se cometan actos de violencia sexual contra civiles, especialmente mujeres y niñas.

Es importante recordar el papel vital del diálogo y la diplomacia como eje central en la promoción de la solución pacífica de los conflictos. Debemos fortalecer el apoyo que se brinda a las víctimas de violencia sexual con servicios de atención médica, asesoramiento psicológico, asistencia legal y rehabilitación socioeconómica accesibles y culturalmente sensibles. Es nuestra responsabilidad remover todas aquellas barreras que impiden el fortalecimiento del papel de la mujer en los procesos de toma de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos y consolidación de la paz. Reitero una vez más el compromiso de Guatemala de continuar implementando plenamente la resolución 1325 (2000) y las resoluciones conexas, siendo este uno de nuestros principales motivos que subyacen a nuestra candidatura al Consejo de Seguridad para el período 2031-2032.

El Presidente (*habla en inglés*): Todavía quedan varias intervenciones en la lista de esta sesión. Habida cuenta de lo avanzado de la hora, con la anuencia de los miembros del Consejo suspenderé la sesión hasta las 15.00 horas.

Se suspende la sesión a las 13.05 horas.